



LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE ANDEAN COMMUNITY

S O N J A K A H L

Cuaderno Doctrinario
001-2022-TJCA

Director

Hugo R. Gómez Apac

Coordinadores

Karla Margot Rodríguez Noblejas
Luis Felipe Aguilar Feijoó

Curaduría

Gustavo Andrés Villacreses Brito
Carlos Sebastián Garcés Vásconez

Quito - 2022



**LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN
LA COMUNIDAD ANDINA**

**ENVIRONMENTAL PROTECTION IN
THE ANDEAN COMMUNITY**

Autora

Sonja Kahl

**Cuaderno Doctrinario
001-2022-TJCA**

Director

Hugo R. Gómez Apac

Coordinadores

Karla Margot Rodríguez Noblejas

Luis Felipe Aguilar Feijoó

Curaduría

Gustavo Andrés Villacreses Brito

Carlos Sebastián Garcés Vásquez

Quito – 2022

Sonja Kahl, *La protección ambiental en la Comunidad Andina*, Cuaderno Doctrinario 001-2022-TJCA (Hugo R. Gómez Apac, Director), Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2022, pp. 113.

Libro digital

Primera edición: Quito, octubre de 2022

© Sonja Kahl

© Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Director

Hugo R. Gómez Apac

Coordinadores

Karla Margot Rodríguez Noblejas

Luis Felipe Aguilar Feijoó

Curaduría: edición y corrección de estilo

Gustavo Andrés Villacreses Brito

Carlos Sebastián Garcés Vásconez

Diagramación y diseño

Andrea Carolina Hidalgo Nevárez

Luis Fernando Castillo Auz

Sello editorial

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo, su traducción, comunicación pública incluida la puesta a disposición, incorporación a un sistema informático, su locación, su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por reprografía (fotocopia, facsímil, fotografía, escaneado, impresión y otros), por grabación u otros métodos, sin la autorización previa y por escrito de los titulares de derechos de autor correspondientes.

ISBN: 978-9942-7053-0-3

NOTAS

Todos los textos que aparecen en esta publicación han sido objeto de curaduría. Sin embargo, ni el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ni el director, ni los coordinadores, ni los encargados de la curaduría se hacen responsables de la exactitud, licitud, veracidad y/o actualidad de sus contenidos u opiniones, los cuales son responsabilidad exclusiva de la autora.

Las declaraciones, ideas y opiniones vertidas en la presente obra son de exclusiva responsabilidad de la autora, y no comprometen ni vinculan, ni directa ni indirectamente, a la jurisprudencia o posición oficial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

La autora es responsable exclusiva de la interpretación que efectúa en el presente trabajo académico de las normas andinas y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como de su lectura y sentido. Dicha interpretación, lectura y sentido no vinculan a la corte andina, y esta no necesariamente las comparte.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina apoya el estudio y difusión del derecho comunitario andino por parte de docentes, profesionales, especialistas, estudiantes, doctrinarios y la academia en general.

La posición oficial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se encuentra en su jurisprudencia.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Magistrados

Hugo R. Gómez Apac (Presidente)
Gustavo García Brito
Hernán Rodrigo Romero Zambrano
Luis Rafael Vergara Quintero

Secretario

Luis Felipe Aguilar Feijoó

Abogados Asesores

Eduardo Almeida Jaramillo
Karla Margot Rodríguez Noblejas

Jefe Administrativo y Financiero

Homero Arellano Ramírez

Abogados Consultores

Lilian Carrera González
Alejandra Muñoz Torres
Lupe Helena Núñez del Arco Viteri
Mariohr Pacheco Sotillo

Asistentes Judiciales

Edison Canchig Echeverría
Carlos Sebastián Garcés Vásquez
Alejandra Romelia Leiva Brussil
Luis Marcelo Ruiz Carrillo
Stephany Margarita Totoy Granja
Gustavo Andres Villacreses Brito
Jorge Luis Zamora Bonilla

ÍNDICE

PRÓLOGO	6
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD ANDINA	10
1. Introducción	10
2. La Comunidad Andina y su Tribunal de Justicia	11
3. Derecho y jurisprudencia ambiental andina	16
3.1. El derecho ambiental andino	16
3.2. Comercio exterior	19
3.3. El derecho agrario y agropecuario	21
3.4. El derecho de propiedad intelectual	28
3.5. Minería ilegal	31
4. La protección ambiental en el marco de la Comunidad Andina	33
4.1. El potencial de las organizaciones regionales	33
4.2. La protección ambiental en la Comunidad Andina – Obstáculos y propuestas	36
5. Conclusión	40
6. Bibliografía	42
7. Declaración de intereses	61
8. Agradecimiento	61
ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE ANDEAN COMMUNITY	64
1. Introduction	64
2. The Andean Community and its Court of Justice	65
3. Andean Environmental Legislation and Jurisprudence	70
3.1. Andean environmental law	70
3.2. Foreign Trade	72
3.3. Agrarian law	75
3.4. Intellectual property law	81
3.5. Illegal mining	84
4. Environmental Protection in the Andean Framework	86
4.1. Potential of regional organizations	86
4.2. Obstacles and proposals to environmental protection in the Andean Community	89
5. Conclusion	93
6. References	95
7. Declaration of Competing Interests	114
8. Acknowledgements	114

PRÓLOGO

Hugo R. Gómez Apac
Magistrado Presidente del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

De conformidad con lo establecido en el literal r) del art. 7 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), aprobado mediante Acuerdo 01/2020, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4011, del 30 de junio de 2020, el Presidente de esta corte internacional, la tercera más activa del mundo, tiene como función coordinar acciones con el objeto de promover la difusión y el perfeccionamiento del derecho comunitario andino.

Las mencionadas acciones pueden expresarse a través del desarrollo de actividades de carácter académico, tales como congresos, conferencias, seminarios, cursos, talleres, diplomados, conversatorios, así como mediante publicaciones de diferente naturaleza, como la elaboración del libro «Apuntes de Derecho Comunitario Andino. A propósito de los 50 años de la Comunidad Andina y los 40 años de creación de su Tribunal de Justicia»¹ del 2019, o el auspicio de la obra colegiada «La Propiedad Industrial y el Derecho de Autor en Iberoamérica: tendencias para la tercera década del Siglo XXI»² del 2021.

En aplicación de lo previsto en los arts. 21 y 23 del Reglamento del Programa de Pasantías del TJCA, aprobado por Acuerdo 05/2017 del 29 de marzo de 2017, abogados, profesores, investigadores, funcionarios públicos, funcionarios de otros órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración y funcionarios de otros organismos internacionales pueden realizar en la corte andina visitas

¹ Editado con el apoyo de la Universidad San Gregorio de Portoviejo (Editorial San Gregorio S.A.).

² Editado con el apoyo de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), la Universidad Hemisferios (UH) y la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual (AEPI).

o estancias académicas o de investigación. Es así que la abogada Sonja Kahl, de nacionalidad alemana-finlandesa y que está siguiendo estudios de doctorado en derecho ambiental internacional en la Universidad de Friburgo (Alemania), realizó en la corte andina una pasantía de investigación entre el 2 de mayo y el 24 de junio de 2022, enfocada en la jurisprudencia del TJCA relacionada con temas ambientales.

En el marco de la elaboración de publicaciones tendientes a estudiar y difundir el derecho comunitario andino y el desarrollo de pasantías de investigación, la Presidencia del TJCA ha considerado pertinente iniciar una serie de cuadernos doctrinarios que tienen por objeto, desde un punto de vista estrictamente académico, el estudio e investigación de normas, principios, conceptos, instituciones y jurisprudencia del derecho andino.

El primer cuaderno doctrinario recoge la investigación realizada por Sonja sobre la protección ambiental en la Comunidad Andina. En su trabajo, ella brinda nociones sobre el proceso de integración subregional andino y las competencias del TJCA, para luego citar la legislación andina vinculada con la protección ambiental. Acto seguido, menciona la jurisprudencia (sentencias e interpretaciones prejudiciales) de la corte andina en materia de comercio exterior, derecho agrario y agropecuario, propiedad intelectual y minería ilegal que aborda de manera directa o indirecta aspectos de carácter ambiental.

La propuesta de la investigación es que los interesados en fortalecer la protección ambiental en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú tienen en el derecho andino un espacio para lograr medidas coercitivas más eficaces por virtud de la operatividad de la acción de incumplimiento que tramita la corte andina. En efecto, si los países miembros del proceso de integración aceptan incorporar en el derecho andino determinadas obligaciones ambientales (compromisos de reforestación, tratamiento de aguas residuales, menos uso de plásticos, promoción de energías limpias, el reemplazo de botaderos de basura por rellenos sanitarios, etc.) a través de Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina, y tales obligaciones son incumplidas, los otros países miembros, la Secretaría General de la Comunidad Andina y las personas naturales y jurídicas afectadas

sus derechos subjetivos o intereses legítimos podrán presentar demanda de incumplimiento ante el TJCA. Y si el país incumpliente desacata su sentencia de incumplimiento, la corte andina podrá autorizar que dicho país sea sancionado con la pérdida de los beneficios del proceso de integración.

El derecho andino brinda un mecanismo de coerción eficaz para lograr el cumplimiento de las obligaciones comunitarias, y es allí donde Sonja ve una oportunidad para lograr una mayor protección ambiental, consistente en que los países miembros incorporen en el ordenamiento jurídico comunitario andino los compromisos ambientales que, no obstante estar previstos en la legislación nacional, no son cumplidos.

Quito, octubre de 2022.

LA PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

Sonja Kahl³

1. Introducción

La Comunidad Andina (en adelante, la **CAN** o la **Comunidad**) no es particularmente reconocida entre los ambientalistas, lo que no es del todo sorprendente, pues, hasta la fecha, la comunidad supranacional compuesta por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú (y Venezuela hasta 2006) ha optado por centrarse en la liberalización e integración de las relaciones comerciales entre sus miembros. Fundada en 1969 por el Acuerdo de Cartagena⁴ y posteriormente reformada por el Protocolo de Trujillo de 1996⁵, la CAN constituye la base estructural de una unión aduanera imperfecta. Inicialmente creada con el objetivo de regular asuntos de comercio e inversión, la Comunidad ahora coordina una gran variedad de asuntos, incluyendo la propiedad intelectual, la agricultura, la integración física (transporte, interconexión eléctrica, telecomunicaciones) y aspectos sociales (migración y movilidad, educación, cultura, ciudadanía andina).

Sin embargo, como pretende mostrar este artículo, la CAN también podría convertirse en una poderosa plataforma para la protección del medio ambiente. Su capacidad de dictar normas jurídicamente

³ Universidad de Friburgo (Alemania).

⁴ Firmado el 26 de mayo de 1969. Acuerdo de Integración Subregional Andino (**Acuerdo de Cartagena**), a la fecha, codificado por la Decisión 563 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena (**GOAC**) núm. 940 del 1 de julio de 2003.

Disponible en:

https://www.tribunalandino.org.ec/wp-content/uploads/2019/06/Acuerdo_Cartagena.pdf

⁵ Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), aprobado en Trujillo, Perú, el 10 de marzo de 1996.

vinculantes y de aplicación inmediata en todos los Estados miembros podría proporcionar un nivel de protección adicional a los sistemas nacionales e internacionales. Además, el hecho de que la implementación del derecho andino pueda ser reclamado ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el **TJCA** o el **Tribunal**) podría mejorar la aplicación y ejecución del derecho ambiental, en la medida que la implementación efectiva del derecho ambiental es de gran necesidad en la subregión.

Después de presentar brevemente el funcionamiento de la Comunidad y su Tribunal, este artículo dará algunas luces sobre el ordenamiento jurídico ambiental andino existente, incluyendo la jurisprudencia del TJCA (2). Si bien espero que este artículo pueda ilustrar que efectivamente existe una conexión entre la protección ambiental y las actividades de la CAN, el análisis mostrará que actualmente no existe un sistema integral y coherente de derecho ambiental andino, el cual permanece en un estado subdesarrollado y fragmentado. El Tribunal ha reconocido la protección del medio ambiente como un objetivo de la Comunidad y ha tratado de «enverdecer» el derecho comercial y agrario andino, pero su potencial está significativamente limitado por la escasez de normativa ambiental (3). Sin embargo, precisamente en este momento, se abre una ventana de tiempo única para las organizaciones no gubernamentales (en adelante, **ONG**) ambientales, los activistas y los académicos para impulsar el desarrollo del derecho ambiental andino y contribuir a la creación de nuevas estructuras a nivel supranacional. La comparación con la Unión Europea ilustra aún más el potencial de las estructuras andinas para la protección ambiental en la región (4).

2. La Comunidad Andina y su Tribunal de Justicia

El derecho andino está constituido por el derecho primario y el derecho secundario. La legislación primaria incluye los tratados constitutivos de la integración andina, celebrados entre los Estados miembros y ratificados por ellos, así como los protocolos e instrumentos complementarios que modifican directamente a los tratados constitutivos. La legislación secundaria consiste en los actos jurídicos emitidos por los órganos de la Comunidad Andina, tales

como las *Decisiones* del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (CAMRE) y la Comisión Andina, y las *Resoluciones* de la Secretaría General⁶.

El derecho andino reviste importantes características supranacionales: autonomía, aplicación inmediata, efecto directo y supremacía sobre el derecho interno. Según los arts. 2 y 3 del Estatuto del Tribunal⁷, el derecho comunitario andino es de aplicación inmediata sin necesidad de ratificación o validación previa por parte de los parlamentos o cualquier otra autoridad nacional (*aplicabilidad inmediata*) y puede, si es suficientemente específico, conferir derechos a los particulares que las autoridades nacionales estén obligadas a respetar y aplicar (*efecto directo*)⁸. La *supremacía* implica que el derecho andino prima sobre cualquier norma nacional y, además, obliga a los Estados miembros a tomar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del derecho comunitario andino⁹. Los Estados miembros están

⁶ Ver arts. 1 y 2 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, aprobado por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, publicada en la GOAC núm. 680 del 28 de junio de 2001.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetatas/GACE680.PDF>

Ver también Sentencia de fecha 12 de noviembre de 1999 (Proceso 07-AI-99), publicada en la GOAC núm. 520 del 20 de diciembre de 1999.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetatas/gace520.pdf>

⁷ Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

⁸ Ver Sentencia de fecha 3 de diciembre de 1987 (Proceso 1-IP-87), publicada en la GOAC núm. 28 del 15 de febrero de 1988.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/1-IP-87.doc>

Ver también Sentencia de fecha 12 de noviembre de 1999 (Proceso 07-AI-99).

⁹ *Ibidem.*

Ver también Sentencia de fecha 24 de marzo de 1997 (Proceso 3-AI-96), publicada en la GOAC núm. 261 del 29 de abril de 1997.

Disponible en:

autorizados a promulgar leyes internas en las materias regidas por el derecho andino, siempre y cuando estas medidas no entren en conflicto o socaven el derecho comunitario (doctrina del *complemento indispensable*)¹⁰. Debido a estas características supranacionales, la Comunidad Andina se considera como la organización internacional subregional más sólida de América Latina y el Caribe¹¹.

Si bien la Comunidad Andina se caracteriza por la supranacionalidad y, de algún modo, por un grado más alto de intergubernamentalismo, está claramente inspirada en la Unión Europea. Lo que es más importante, ha adoptado su estructura legal supranacional (que se analizará más adelante). Institucionalmente, la Comunidad cuenta con órganos propios como un Consejo de Presidentes, un Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, un Parlamento regional, una Secretaría General y su propio Tribunal de Justicia, que vela por la correcta interpretación y aplicación del derecho comunitario.

A efectos de este artículo, conviene señalar tres de las competencias más importantes del TJCA. En primer lugar, en la *acción de incumplimiento*, el Tribunal está facultado para examinar la alegada violación del derecho comunitario andino por parte de un Estado

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace261.pdf>

Asimismo ver William Guillermo Jiménez, *Papel de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Decisiones Judiciales de los Países Miembros*, en: *Revista Colombiana de Derecho Internacional*, 23, 2013, pp. 104-105.

¹⁰ Ver párrafos 45 y 46 de la Interpretación Prejudicial de fecha 30 de abril de 2014 (Proceso 15-IP-2014), publicada en la GOAC núm. 2355 del 30 de junio de 2014.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2355.pdf>

¹¹ Giovanni Molano-Cruz y Stephen Kingah, *Addressing Human Rights in the Court de Justice de the Andean Community and the Tribunal de the Southern African Development Community*, en: *Colombia Internacional*, 81, 2014, p. 103.

miembro¹². El propio Tribunal ha destacado el papel clave de la acción de incumplimiento para el control de la conducta estatal¹³. En segundo lugar, en la *acción de nulidad*, el Tribunal puede examinar si un órgano de la Comunidad Andina ha violado el derecho comunitario¹⁴. Ambos procedimientos pueden ser iniciados por órganos específicos de la Comunidad (como la Secretaría General), otro Estado miembro y entidades privadas si estas se ven afectadas en sus derechos subjetivos o intereses legítimos¹⁵. En el caso de la acción de incumplimiento, las entidades privadas y los Estados miembros deben pasar por una fase administrativa previa ante la Secretaría General antes de poder acudir al Tribunal¹⁶.

En tercer lugar, en la *acción de interpretación prejudicial*, el

¹² Ver arts. 23-31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 483 del 17 de setiembre de 1999.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace483.pdf>

Ver también arts. 107-111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

¹³ «Esta acción, establecida y regulada en los artículos 23 a 27 del Tratado de Creación constituye el instrumento por excelencia, mediante el cual el Tribunal está llamado a vigilar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los Países Miembros de acatar y no obstaculizar la aplicación de las normas que constituyen el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.» (Sentencia de fecha 12 de noviembre de 1999 [Proceso 07-AI-99]).

¹⁴ Ver arts. 17-22 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Asimismo, arts. 101-104 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

¹⁵ Ver Sentencia de fecha 23 de agosto de 2018 (Proceso 01-AN-2015), publicada en la GOAC núm. 3369 del 13 de setiembre de 2018.

Disponible en:

[https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta 3369.pdf](https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203369.pdf)

Ver también más adelante para detalles sobre el *ius standi*.

¹⁶ Ver arts. 23-25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ver también Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Comunidad Andina.

Tribunal Andino está facultado para responder a cuestiones sobre la interpretación del derecho comunitario andino que surjan ante las cortes nacionales y que estas le remitan¹⁷. El propósito es asegurar la aplicación uniforme del derecho andino en los Estados miembros¹⁸. Las solicitudes de interpretación son opcionales para los tribunales nacionales inferiores y obligatorias para los tribunales de última instancia¹⁹. El TJCA emitirá una aclaración o interpretación abstracta de la norma andina en cuestión, sin pronunciarse sobre la controversia nacional subyacente²⁰. La decisión del Tribunal Andino será remitida a los tribunales nacionales, quienes deberán adoptar la interpretación del TJCA al momento de resolver la controversia ante ellos²¹.

Cabe señalar que una interpretación prejudicial también puede ser solicitada por órganos administrativos, si estos ejercen funciones «jurisdiccionales», es decir, si emiten una decisión imparcial y jurídicamente vinculante para resolver una controversia entre dos partes²². Mientras que, en el pasado, el Tribunal requería que la

¹⁷ *Ibidem*, arts. 32-38 y arts. 121-128, respectivamente.

¹⁸ *Ibidem*, art. 32 y art. 121, respectivamente.

¹⁹ *Ibidem*, art. 33 y arts. 122-123, respectivamente.

²⁰ *Ibidem*, art. 34 y art. 126, respectivamente.

²¹ *Ibidem*, art. 35 y art. 127, respectivamente.

Asimismo, ver Interpretación Prejudicial de fecha 2 de febrero de 2005 (Proceso 157-IP-2004), publicada en la GOAC núm. 1175 del 15 de marzo de 2005.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetatas/Gace1175.pdf>

²² Ver párrafos 22-29 de la Interpretación Prejudicial de fecha 20 de noviembre de 2014 (Proceso 121-IP-2014), publicada en la GOAC núm. 2427 del 11 de diciembre de 2014.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetatas/GACE2427.pdf>

Ver también Interpretación Prejudicial de fecha 28 de noviembre de 2014 (Proceso 105-IP-2014), publicada en la GOAC núm. 2459 del 4 de marzo de

agencia administrativa conozca en una disputa entre dos particulares, abandonó este criterio en el Proceso 426-IP-2019 y aceptó que la disputa subyacente pueda ser entre una entidad privada y un órgano administrativo²³. La consecuencia práctica es que la interpretación prejudicial también puede ser solicitada por la mayoría de las agencias ambientales.

3. Derecho y jurisprudencia ambiental andina

Como se mencionó anteriormente, el derecho andino actualmente regula una variedad de materias. Sin embargo, sus actos normativos más fuertes aún se relacionan con cuestiones de comercio y propiedad intelectual, mientras que la legislación ambiental permanece en un nivel gravemente subdesarrollado. De manera similar, aunque el Tribunal Andino tenga la competencia y el deber de garantizar que los Estados miembros cumplan con el derecho comunitario andino, incluido el derecho ambiental, hasta la fecha no ha emitido ninguna jurisprudencia ambiental significativa, y aproximadamente el 90% de sus decisiones se relacionan con asuntos de propiedad intelectual²⁴.

3.1. El derecho ambiental andino

Dado que la protección del medio ambiente no era una prioridad en el momento de adopción del Acuerdo de Cartagena, las referencias al medio ambiente aparecen solo esporádicamente. Por ejemplo, el

2015.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2459.pdf>

²³ Ver párrafo 18 de la Interpretación Prejudicial de fecha 6 de mayo de 2022 (Proceso 426-IP-2019), publicada en la GOAC núm. 4487 del 2 de junio de 2022.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204487.pdf>

²⁴ Hugo R. Gómez Apac, Daniel Solines Moreno, Karla Rodríguez Noblejas, *Desafíos de la propiedad intelectual en el marco del proceso de integración andina*, primera edición, Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual – AEPI, Quito, 2019, p. 10.

art. 1 establece la promoción de un «desarrollo equilibrado y armónico» como uno de los principales objetivos de la Comunidad, y el art. 3 establece que los Estados deberán tomar «acciones para el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y del medio ambiente»²⁵. Se hacen varias otras referencias a la sostenibilidad en el contexto de la industria²⁶, el comercio²⁷ y la agricultura²⁸. Además, el Acuerdo de Cartagena contiene el importante art. 128, que establece que «[l]os Países Miembros emprenderán acciones conjuntas que permitan un mayor aprovechamiento de sus recursos naturales renovables y no renovables y la conservación y mejoramiento del medio ambiente». Sin embargo, este instrumento no contiene un capítulo autónomo dedicado a la protección del medio ambiente, considerándolo solo como un aspecto general de la cooperación económica y social.²⁹

La falta de legislación ambiental se extiende al dominio del derecho secundario. La importante *Decisión 182*³⁰ data de 1983 y establece el sistema «José Celestino Mutis» sobre agricultura, seguridad alimentaria y conservación del ambiente. Su objetivo es armonizar las prácticas agrícolas y preservar el medio ambiente, y requiere que los Estados miembros participen en el uso y manejo racional de los bosques, los pastizales y las cuencas hidrográficas, que protejan los ecosistemas marinos de la contaminación, y que se comprometan a la educación y sensibilización ambiental.

²⁵ Art. 3 (Literal d del Numeral 2) del Acuerdo de Cartagena.

²⁶ *Ibidem*, art. 60 (Literal c).

²⁷ *Ibidem*, art. 73 (Literal d del Numeral 2).

²⁸ *Ibidem*, arts. 87(Literal a) y 88 (Literales f y h).

²⁹ Eugenia Ponce de León, *Temas de Derecho Comunitario Ambiental Andino*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001, pp. 95-102.

³⁰ Decisión 182 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de fecha 25 de julio de 1983.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/decisiones/DEC182.doc>

Otros actos legales incluyen la *Decisión 435* (1998), que establece el Comité Andino de Autoridades Ambientales (CAAAM); la *Decisión 523* (2002), que aprueba la Estrategia Regional de Biodiversidad (2002); la *Decisión 529* (2002), que crea el Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres; la *Decisión 596* (2004), que crea el Consejo de Ministros de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Comunidad Andina; la *Decisión 699* (2008), sobre indicadores ambientales; la *Decisión 713* (2009), sobre la Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres; la *Decisión 762* (2011), sobre el Programa de Adaptación al Cambio Climático; y, la *Decisión 763* (2011), sobre la Estrategia Andina para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.

En 2013, en el contexto de la *Reingeniería* de la Comunidad, el desarrollo de la legislación ambiental andina se paralizó casi por completo, ya que se priorizaron ciertas áreas temáticas de integración, mientras que otras, incluyendo el medio ambiente, debían convertirse en competencia de la planeada Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)³¹. Sin embargo, en tanto que el proyecto UNASUR está fuertemente debilitado, han resurgido las iniciativas para reactivar el desarrollo del derecho ambiental en la Comunidad Andina. Por ejemplo, en 2020 se adoptó la Carta Ambiental Andina, que incluye un derecho humano a un medio ambiente sano e identifica varios objetivos ambientales comunes de los Estados miembros. Aunque la Carta no sea jurídicamente vinculante, podría catalizar el desarrollo del derecho ambiental comunitario andino.

³¹ Decisión 792 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, reunido en forma ampliada con los representantes titulares ante la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 2238 del 23 de setiembre de 2013.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetatas/Gace2238.pdf>

Decisión 797 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en reunión ampliada con los representantes titulares ante la Comisión, publicada en la GOAC núm. 2400 del 15 de octubre de 2014.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetatas/GACE2400.pdf>

3.2. Comercio exterior

Cabe señalar que la Comunidad Andina ha emitido varios actos legislativos que, a pesar de no ser considerados estrictamente ambientales, tienen relevancia para la protección del medio ambiente. Estos incluyen actos normativos en materia de comercio, agricultura, propiedad intelectual y minería ilegal.

En el área comercial, el art. 72 del Acuerdo de Cartagena establece un área subregional de libre comercio (Programa de Liberación) y obliga a los Estados miembros a eliminar todas las barreras y restricciones a las importaciones de otros Estados miembros. De conformidad con el art. 73, se pueden hacer excepciones para las medidas destinadas a proteger la vida y la salud de personas, animales y plantas³². En este contexto, el Tribunal Andino ha sido llamado para encontrar un equilibrio entre asuntos de interés público, tales como la salud humana, animal y vegetal, y la libertad comercial.

Por ejemplo, el Tribunal ha tratado con una prohibición de importación de ajo procedente del Perú por parte de Venezuela, presuntamente infestado de una plaga llamada «carbón de cebolla»³³; o de café procedente de Colombia, supuestamente afectado por un parásito llamado «broca del café»³⁴. El Tribunal reconoció el derecho de un Estado miembro a restringir el libre

³² Art. 73 (Literal d) del Acuerdo de Cartagena.

³³ Ver p. 11 de la Sentencia de fecha 11 de diciembre de 1997 (Proceso 1-AI-97), publicada en la GOAC núm. 329 del 9 de marzo de 1998.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace329.pdf>

Ver también p. 19 de la Sentencia de fecha 8 de junio de 1998 (Proceso 5-AN-97), publicada en la GOAC núm. 361 del 7 de agosto de 1998.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace361.pdf>

³⁴ Sentencia de fecha 26 de febrero de 1998 (Proceso 1-AN-97), publicada en la GOAC núm. 340 del 13 de mayo de 1998.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace340.pdf>

comercio para proteger la salud humana, animal y vegetal, pero exigió que la medida restrictiva sea necesaria, proporcional y no discriminatoria, y que no exista una alternativa menos restrictiva³⁵. Además, el Estado debe seguir los procedimientos establecidos por el derecho comunitario³⁶.

El Tribunal otorgó mayor significado a la protección del medio ambiente en su jurisprudencia más reciente. En el Proceso 116-IP-2012 (*Partes de vehículos usados*), que trataba de una disputa en torno a una restricción a la importación de partes de vehículos usados para proteger el medio ambiente, el Tribunal reconoció que los derechos a la vida, la salud, la integridad física y un medio ambiente sano constituyen «principios generales del derecho comunitario andino», y que el derecho comunitario pertinente debe ser interpretado a la luz de estos derechos³⁷.

En el Proceso 02-AN-2015 (*CKDs*), el Tribunal declaró la nulidad parcial de dos Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina debido a que calificaron incorrectamente como restricción al comercio intrasubregional las medidas adoptadas por el Ecuador, que establecían restricciones cuantitativas para la

³⁵ Ver pp. 11-14 de la Sentencia de fecha 11 de diciembre de 1997 (Proceso 1-AI-97); pp. 32-33 y 40 de la Sentencia de fecha 26 de febrero de 1998 (Proceso 1-AN-97); p. 19 de la Sentencia de fecha 8 de junio de 1998 (Proceso 5-AN-97).

Esto ha sido confirmado más recientemente en los párrafos 2.12-2.17 de la Interpretación Prejudicial de fecha 4 de mayo de 2017 (Proceso 272-IP-2016), publicada en la GOAC núm. 3722 del 8 de agosto de 2019.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203722.pdf>

³⁶ Ver por ejemplo la Decisión 328 del la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en la GOAC núm. 118 del 30 de octubre de 1992.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace118.pdf>

³⁷ Ver pp. 8-10 de la Interpretación Prejudicial de fecha 13 de noviembre de 2012 (Proceso 116-IP-2012), publicada en la GOAC núm. 2161 del 8 de marzo de 2013.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2161.pdf>

importación, en general, de vehículos y de CKD (*Complete knock-down*) de vehículos. Explicó que tales medidas no eran discriminatorias y eran idóneas para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero provenientes del parque automotor.³⁸ Para los jueces, el hecho de que el sector transporte solo fuera responsable del 3% de la emisión de gases de efecto invernadero no impedía que Ecuador adopte medidas de mitigación en dicho sector³⁹. Además, el Tribunal también señaló que las medidas identificadas por la Secretaría General —implementación de carriles exclusivos para buses, el uso de ciclovía, entre otros— no eran alternativas del sector automotriz, sino complementarias⁴⁰.

3.3. El derecho agrario y agropecuario

La rica biodiversidad de la subregión andina está bajo constante amenaza por el avance de la frontera agrícola, razón por la cual la protección ambiental siempre ha estado estrechamente relacionada con el sector agrario⁴¹. Asimismo, su incorporación a la Organización Mundial del Comercio exigió a los Estados andinos introducir normas sanitarias y fitosanitarias armonizadas para protegerse de enfermedades animales y vegetales⁴². Importantes actos normativos incluyen la *Decisión 328* (1992) (posteriormente reemplazada por la *Decisión 515* [2002]) y la *Decisión 436* (1998) (posteriormente modificada por la *Decisión 804* [2015]) que establecen el Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria y determinan

³⁸ Ver página 43 de la Sentencia de fecha 26 de agosto de 2016 (Proceso 02-AN-2015), publicada en la GOAC núm. 2810 del 15 de setiembre de 2016.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2810.pdf>

³⁹ *Ibidem*, párrafo 3.4.19.

⁴⁰ *Ibidem*, párrafos 3.4.27-3.4.28.

⁴¹ Victor Tafur Dominguez, *International Environmental Harmonization - Emergence and Development of the Andean Community*, en: *Pace International Law Review*, 12(2), 2000, p. 308.

⁴² *Ibidem*, p. 310. También ver Eugenia Ponce de León, *Temas de Derecho Comunitario Ambiental Andino*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001, pp. 92-94.

los principios para la protección de la salud vegetal y animal. La *Decisión 436* introdujo además un sistema para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola. Desde el año 2000, la legislación agraria y agropecuaria andina se ha ido expandiendo hasta resultar en un orden jurídico muy detallado, específico, técnico y con una densidad normativa considerable. Esto incluye numerosas Decisiones y Resoluciones dedicadas a la lucha contra enfermedades animales específicas⁴³ y al establecimiento de los procedimientos

⁴³ Ver, por ejemplo:

Decisión 519 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 803 del 10 de junio de 2002.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace803.pdf>

Decisión 735 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 1841 del 8 de junio de 2010.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1841.pdf>

Decisión 793 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 2280 del 16 de diciembre de 2013.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2280.pdf>

Decisión 754 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 1948 del 31 de mayo de 2011.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1948.pdf>

Decisión 814 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 2841 del 4 de noviembre de 2016.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2841.pdf>

Resolución 1851 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 2739 del 20 de mayo de 2016.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2739.pdf>

Resolución 1970 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 3159 del 12 de diciembre de 2017.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3159.pdf>

sanitarios para la importación de diferentes especies de animales⁴⁴.

En este contexto, el Tribunal ha aclarado que estas leyes sirven no solo para la promoción de la competitividad agrícola, sino también para la protección del medio ambiente. Por ejemplo, en el Proceso 90-IP-2008 (*Ubicación de mataderos*)⁴⁵, el Tribunal brindó

⁴⁴ Ver, por ejemplo:

Resolución 1160 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 1615 del 5 de mayo de 2008.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1615.pdf>

Resolución 1430 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 1970 del 19 de agosto de 2011.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1970.pdf>

Resolución 1586 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 2201 del 24 de mayo de 2013.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2201.pdf>

Resolución 1588 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 2204 del 28 de mayo de 2013.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2204.pdf>

Resolución 1791 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 2535 del 14 de julio de 2015.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2535.pdf>

Decisión 737 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 1841 del 8 de junio de 2010.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1841.pdf>

Decisión 808 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 2710 del 13 de abril de 2016.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2710.pdf>

⁴⁵ Interpretación Prejudicial de fecha 22 de agosto de 2008 (Proceso 90-IP-2008), publicada en la GOAC núm. 1662 del 9 de octubre de 2008.

orientación sobre la interpretación de la *Decisión 197* (1984), que entonces regulaba la ubicación de mataderos. Los Magistrados explicaron que, además de promover el desarrollo de la ganadería y la agroindustria de carne bovina en la región, la *Decisión 197* también tiene como objetivo la protección de «bienes superiores como la salud y la vida de las personas, así como con la protección del derecho a un ambiente sano»⁴⁶. Más específicamente, señalaron que «la libertad empresarial debe desarrollarse dentro del marco de los derechos humanos y los derechos fundamentales y, por lo tanto, no es un derecho absoluto que no tenga límites»⁴⁷. Después, el Tribunal fijó algunas líneas directrices más específicas sobre dónde pueden o no ubicarse los mataderos para evitar efectos perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente⁴⁸. En este contexto, amplió el alcance de la *Decisión 197*, la cual solo mencionaba los centros poblados, a otras áreas⁴⁹.

En el Proceso 133-IP-2012 (*Reglamento técnico para la miel*), el Tribunal fue llamado a interpretar la *Decisión 376* (2006) que autoriza a los Estados miembros a adoptar reglamentos técnicos para la protección de la salud humana y el medio ambiente. En el procedimiento nacional se había impugnado un reglamento técnico emitido por el gobierno de Colombia que especificaba los requisitos sanitarios para la miel por presuntamente afectar el empleo, la competencia y la libertad económica⁵⁰. El Tribunal Andino confirmó el derecho de los Estados miembros de adoptar, mantener y aplicar

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetitas/Gace1662.pdf>

⁴⁶ *Ibidem*, párrafo B.

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ *Ibidem*, párrafo B y Concluye Segundo.

⁴⁹ Marcelo Vargas Mendoza, *El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Defensa de los Derechos Humanos*, en: Claudia Escobar García (ed.), *Teoría y práctica de la justicia constitucional*, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Quito, 2010, pp. 491-492.

⁵⁰ *Ibidem*, p. 11.

reglamentos técnicos con el objetivo de proteger la vida y la salud humana, animal y vegetal, el medio ambiente y el consumidor⁵¹. En particular, confirmó que «[a]l estar enfrentados estos derechos, es decir, el del desarrollo agrícola competitivo frente a la vida, la salud y el acceso a un ambiente sano, es patente para el Tribunal que el primero debe ceder frente a los segundos»⁵².

Uno de los ejemplos más importantes de jurisprudencia «ambiental» del Tribunal Andino —también para los fines de este artículo— es la *Saga de los Plaguicidas*. Esta serie de casos se relaciona con la implementación de una normativa andina que obligaba a los Estados miembros a registrar y controlar los plaguicidas químicos de uso agrícola⁵³. Más específicamente, los casos se referían a la legislación

⁵¹ *Ibidem*, pp. 9 y 13.

⁵² *Ibidem*, p. 11, citando a la Sentencia de fecha 27 de enero de 2009 (Proceso 05-AI-2008), p. 21.

⁵³ Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 347 del 17 de junio de 1998.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace347.pdf>

Resolución 630 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 810 del 26 de junio de 2002.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace810.pdf>

Interpretación Prejudicial de fecha 29 de abril de 2010 (Proceso 114-IP-2009), publicada en la GOAC núm. 1860 del 4 de agosto de 2010.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1860.pdf>

Interpretación Prejudicial de fecha 25 de febrero de 2010 (Proceso 115-IP-2009), publicada en la GOAC núm. 1828 del 30 de abril de 2010.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1828.pdf>

Sentencia de fecha 27 de enero de 2009 (Proceso 05-AI-2008).

Sentencia de fecha 22 de junio de 2011 (Proceso 02-AI-2010), publicada en la GOAC núm. 1973 del 26 de agosto de 2011.

Disponible en:

nacional de algunos Estados miembros que socavaba los requisitos de la legislación andina.

En dos Interpretaciones Prejudiciales que absolvieron consultas provenientes de Colombia⁵⁴, el Tribunal reconoció los peligros que representa el uso descontrolado de pesticidas para seres humanos, animales y plantas, y el ecosistema en general⁵⁵. Incluso hizo referencia a varios instrumentos de derecho internacional que enfatizan la necesidad de regular mejor los productos químicos tóxicos y reiteró que el objetivo de la *Decisión 436* (1998) es la protección de la vida, la salud y el medio ambiente⁵⁶. El Tribunal afirmó la supremacía del derecho comunitario andino sobre la legislación interna, y reiteró que, de acuerdo con la doctrina del *complemento indispensable*, el derecho nacional no debe establecer requisitos adicionales, paralelos o contradictorios en una materia regulada por el derecho andino⁵⁷.

Posteriormente, en cuatro acciones de incumplimiento contra el Perú, el Tribunal Andino se volvió en lo que *Alter, Helfer y Madsen* llaman «cada vez más enérgico al impugnar el incumplimiento de la

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1973.pdf>

Sentencia de fecha 19 de julio de 2012 (Proceso 01-AI-2011), publicada en la GOAC núm. 2086 del 27 de agosto de 2012.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2086.pdf>

Sentencia de fecha 16 de julio de 2013 (Proceso 01-AI-2012), publicada en la GOAC núm. 2265 del 3 de diciembre de 2013.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2265.pdf>

⁵⁴ Interpretaciones Prejudiciales de fechas 29 de abril de 2010 (Proceso 114-IP-2009) y 25 de febrero de 2010 (Proceso 115-IP-2009).

⁵⁵ Ver pp. 16-17 y 23 de la Interpretación Prejudicial de fecha 29 de abril de 2010 (Proceso 114-IP-2009).

⁵⁶ *Ibidem*, pp. 13-14, 16, 20-21.

⁵⁷ *Ibidem*, pp. 12-13 y 37.

legislación en su totalidad»⁵⁸. El Tribunal determinó que el Perú había violado la legislación andina sobre plaguicidas al introducir excepciones al régimen, poniendo en grave peligro la vida, la salud y el equilibrio del ecosistema, y ordenó al Perú implementar correctamente la normativa andina⁵⁹. En cada ocasión, el Perú respondió con medidas poco entusiastas, intentando eludir las normas andinas sobre plaguicidas mediante la introducción de nuevas excepciones y lagunas⁶⁰. En uno de los casos, se puede leer entre líneas la preocupación de los Magistrados andinos cuando agregaron que «el Tribunal recuerda al País Miembro que con este ya se han tramitado hasta tres procesos con hechos conexos y relacionados y, por tanto, le reitera su obligación de proceder conforme a los principios fundamentales de la integración subregional y de una verdadera cooperación entre sus Estados Miembros»⁶¹.

Finalmente, los Estados miembros aprobaron la *Decisión 804* (2015), que modificó completamente la *Decisión 436* (1998) y otorgó mayor libertad de acción a los Estados miembros, y la *Resolución 630* (2002) fue reemplazada por la *Resolución 2075* (2019). Algunos comentaristas opinan que mediante estas reformas los Estados miembros recortaron la regulación andina a favor de reglas menos estrictas, cambiando *de facto* las reglas del juego después de perder⁶², mientras que otros creen que las normas andinas eran demasiado estrictas para que los Estados pudieran realísticamente

⁵⁸ Karen Alter, Laurence Helfer, Mikael Rask Madsen, *International Court Authority*, Oxford University Press, Oxford, 2018, pp. 185-186 (traducción propia).

⁵⁹ Ver pp. 23-25 de la Sentencia de fecha 27 de enero de 2009 (Proceso 05-AI-2008).

⁶⁰ Karen Alter, Laurence Helfer, Mikael Rask Madsen, *International Court Authority*, Oxford University Press, Oxford, 2018, pp. 185-186.

⁶¹ Ver p. 22 de la Sentencia de fecha 19 de julio de 2012 (Proceso 01-AI-2011).

⁶² Karen Alter, Laurence Helfer, Mikael Rask Madsen, *International Court Authority*, Oxford University Press, Oxford, 2018, pp. 185-186. También, entrevista de la autora con un Magistrado anónimo del TJCA (Quito, 6 de junio de 2022).

cumplir con ellas, por lo cual necesitaban ser actualizadas⁶³. Sin embargo, los casos de los plaguicidas son de gran interés porque el Tribunal Andino no simplemente se limitó a «enverdecer» el derecho comercial y agrícola andino o a introducir consideraciones ambientales en estas áreas del derecho, sino que contribuyó directamente a la implementación de las normas ambientales en los países miembros.

3.4. El derecho de propiedad intelectual

Adicionalmente, se han adoptado varios actos normativos en materia de protección de propiedad intelectual que también son relevantes para el medio ambiente. Por ejemplo, la *Decisión 486* (2000) tiene una importante dimensión ambiental ya que excluye de la protección de patentes a los seres vivos o sus partes tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el genoma o germoplasma de un ser vivo, y cualquier invención que pueda poner en peligro la preservación de las plantas, los animales y el medio ambiente⁶⁴. También incluye una disposición especial para proteger los recursos genéticos y biológicos de las comunidades indígenas y afrodescendientes⁶⁵. La *Decisión 345* (1993) sirve para salvaguardar los derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales, que suelen ser agricultores tradicionales y comunidades indígenas, y la *Decisión 391* (1996) tiene por objeto regular el acceso a los recursos genéticos y proteger el patrimonio biológico de los Estados y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y rurales.

En este contexto, el Tribunal Andino ha brindado orientación sobre cómo deben abordarse los conflictos entre la protección de la propiedad intelectual y del medio ambiente. Dispuso en el Proceso

⁶³ Entrevista de la autora con un oficial anónimo del Directorado I de la Secretaría General de la Comunidad Andina (Quito y Bogotá, 20 de mayo de 2022).

⁶⁴ Ver arts. 14-21 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 600 del 19 de setiembre de 2000.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace600.pdf>

⁶⁵ *Ibidem*, art. 3.

01-AI-1996 (*Pipeline patents*) (que se refería a la *Decisión 344* [1993], sustituida por la *Decisión 486* [2000]) que no se pueden conceder patentes a invenciones que atenten contra el orden público, la salud y la vida humana o animal, y la preservación de la flora y el medio ambiente⁶⁶. En el Proceso 45-IP-2008 (*GANAVET*), el Tribunal aclaró que una marca no puede ser registrada si existe un riesgo de confusión con otra marca y la confusión es susceptible de causar daños a la salud de los seres vivos tales como humanos, animales o plantas⁶⁷.

En el Proceso 60-IP-2012 (*Coca indígena*), el Tribunal se pronunció sobre protección de los derechos de las comunidades indígenas a su patrimonio biológico. El caso gira en torno a las condiciones de consulta y consentimiento de una comunidad indígena para utilizar comercialmente sus conocimientos tradicionales. Al interpretar la *Decisión 486*, el Tribunal explicó que los procedimientos respectivos deben tener en cuenta el derecho interamericano de derechos humanos⁶⁸. Curiosamente, además de proteger los derechos de los pueblos indígenas, el Tribunal enfatizó que la

⁶⁶ Ver p. 26 de la Sentencia de fecha 30 de octubre de 1996 (Proceso 1-AI-96), publicada en la GOAC núm. 234 del 21 de noviembre de 1996.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace234.pdf>

⁶⁷ Ver p. 31 de la Interpretación Prejudicial de fecha 14 de mayo de 2008 (Proceso 045-IP-2008), publicada en la GOAC núm. 1641 del 31 de julio de 2008. En este caso, se consideraron dos marcas similares – *Ganavet* (un antiparasítico de uso veterinario) y *Ganavit* (vitaminas).

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1641.pdf>

Véase también, Interpretación Prejudicial de fecha 6 de junio de 2012 (Proceso 19-IP-2012), publicada en la GOAC núm. 2097 del 26 de setiembre de 2012. Este caso sobre un logo similar para un perfume y un herbicida.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2097.pdf>

⁶⁸ Ver p. 32 de la Interpretación Prejudicial de fecha 24 de octubre de 2012 (Proceso 60-IP-2012), publicada en la GOAC núm. 2157 del 27 de febrero de 2013.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2157.pdf>

Decisión 486 también protege al consumidor de ser engañado, ya que una marca no debe registrarse si incluye signos engañosos que puedan confundir al consumidor sobre el origen, la naturaleza, el método de fabricación o las calidades del producto⁶⁹. Con un poco de creatividad, esta última afirmación podría volverse relevante en casos de «ecoblanqueo» (*greenwashing*), es decir la denominación y comercialización engañosa de un producto como respetuoso con el medio ambiente con el fin de aumentar las ganancias de su comercialización.

La conexión entre la propiedad intelectual y la protección del medio ambiente es mucho menos obvia que con otras áreas del derecho. Sin embargo, existe el potencial para una multitud de casos sobre el tema. Una protección estricta de la propiedad intelectual puede proporcionar un incentivo para la investigación y la innovación en muchos campos, desde tecnologías para la mitigación de y la adaptación al cambio climático hasta el desarrollo de fórmulas para plaguicidas, pero también puede proporcionar a ciertas empresas (especialmente las de países desarrollados) una posición de monopolio y obstaculizar la competencia equitativa⁷⁰. Además, las normas de propiedad intelectual cobran relevancia en materia de patentes de seres sintientes, ya sea con fines artísticos y estéticos (*bioarte*) o con el objetivo de modificar la genética de animales o plantas para la investigación científica⁷¹. Con su experiencia en cuestiones de propiedad intelectual, puede anticiparse que el Tribunal tome algunas decisiones sabias sobre estos asuntos en el futuro.

⁶⁹ *Ibidem.*

⁷⁰ Ariadna Figueroa Hernández y Yendry Hernández Benítez, *Los Derechos de Propiedad Intelectual y el Medioambiente: Las Negociaciones sobre el Cambio Climático*, en: *Revista la Propiedad Inmaterial*, 28, 2019, pp. 43, 47-49, 53.

⁷¹ Interpretación Prejudicial de fecha 27 de octubre de 2000 (Proceso 21-IP-2000), publicada en la GOAC núm. 631 del 10 de enero de 2001.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetitas/GACE631.PDF>

3.5. Minería ilegal

No considerado derecho ambiental en sentido estricto, la lucha contra la minería ilegal no fue paralizada en el transcurso de la *Reingeniería* de 2013. Por ello, la Comunidad Andina ha emitido varias *Decisiones* en su lucha contra la minería ilegal en la región, como son las *Decisiones* 774 (2012) y 844 (2019). Mientras que la *Decisión* 774 aspira a impulsar acciones coordinadas contra la minería ilegal, la *Decisión* 844 establece el Observatorio Andino encargado de la gestión de la información oficial en materia de mercurio. El Observatorio está a punto de ser operativo y su reglamento de funcionamiento fue aprobado el año pasado⁷².

En dos interpretaciones prejudiciales, el Tribunal aclaró la aplicación de la *Decisión* 774 a los mineros ilegales e informales. Ambos operan sin autorización oficial u otros vínculos formales con el gobierno, pero la minería ilegal se lleva a cabo en zonas de protección ambiental o utilizando maquinaria pesada, mientras que la minería informal es realizada por pequeños mineros tradicionales y artesanales⁷³. En el Proceso 575-IP-2015 (*Minería ilegal I*), el Tribunal explicó que era recomendable que los Estados introdujeran diferentes regímenes para la legalización o regularización de los mineros ilegales e informales. Sin embargo, explicó que el objetivo de la normativa andina es «proteger el medio ambiente, la salud de la población y los recursos naturales»⁷⁴, y no a la minería informal

⁷² Resolución 2197 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 4229 del 30 de abril de 2021.

Disponible en:

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta_4229.pdf

⁷³ Ver Ministerio del Ambiente de Perú, *Diálogos Ambientales con la Prensa - Minería Ilegal*, 2013.

Disponible en:

<https://www.minam.gob.pe/prensa/dialogos-ambientales/dialogos-ambientales-mineria-ilegal-y-mineria-informal/> (Acceso: 8 de junio de 2022)

⁷⁴ Ver párrafos 2.5-2.6 de la Interpretación Prejudicial de fecha 17 de febrero de 2017 (Proceso 575-IP-2015), publicada en la GOAC núm. 2968 del 15 de marzo de 2017.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2968.pdf>

de pequeña escala. Por lo tanto, la diferenciación entre el concepto de “minería de pequeña escala, artesanal o tradicional” y la “minería ilegal”, no implica que las personas que realizan actividad minera de pequeña escala, artesanal o tradicional se encuentren excluidas de la obligación de cumplir con los permisos, exigencias y requisitos legales establecidos, puesto que, de no cumplirse con ello, también podrían incurrir en el supuesto de minería ilegal⁷⁵.

El Tribunal confirmó en el Proceso 669-IP-2015 (*Minería ilegal II*) (relacionado con un decreto colombiano que autorizaba a la policía a confiscar y destruir de inmediato toda la maquinaria pesada utilizada en actividades mineras sin autorización minera o licencia ambiental) que el propósito de la *Decisión 774* es combatir y erradicar la minería ilegal generando «herramientas más efectivas para combatir y erradicar la minería ilegal en cada uno de los países miembros y así evitar los daños al ambiente, ecosistemas, biodiversidad, recursos naturales y a la vida y salud de la población»⁷⁶. Por lo tanto, reconoció que los Estados miembros tienen un gran margen de maniobra cuando se trate de desarrollar normas de fiscalización para la destrucción de maquinaria utilizada en la minería ilegal⁷⁷.

Ambas decisiones dejan claro que, si bien los mineros informales pueden esperar un trato diferenciado en los procedimientos relacionados con su formalización y legalización, no pueden esperar ningún trato preferencial por parte de las fuerzas del orden público cuando continúen operando al margen de la ley. En general, vale la pena citar las palabras del Tribunal sobre la minería ilegal:

«Un flagelo que azota a los cuatro países de la Comunidad Andina es la minería ilegal. Una minería que se desarrolla sin permisos,

⁷⁵ *Ibidem*, párrafo 3.3.

⁷⁶ Ver párrafos B.3.5-3.6 de la Interpretación Prejudicial de fecha 17 de febrero de 2017 (Proceso 669-IP-2015), publicada en la GOAC núm. 2969 del 16 de marzo de 2017.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2969.pdf>

⁷⁷ *Ibidem*, párrafos 3.7-3.9.

sin autorizaciones, sin estudios de impacto ambiental; una minería que se desarrolla en zonas prohibidas, tales como ríos, zonas de amortiguamiento, áreas naturales protegidas; una minería que utiliza mercurio en los ríos, sustancia que esteriliza la tierra, envenena a los peces y enferma a las personas; una minería que viene destruyendo los bosques de la Amazonía...»⁷⁸.

4. La protección ambiental en el marco de la Comunidad Andina

4.1. El potencial de las organizaciones regionales

La estructura supranacional de la Comunidad Andina tiene un gran potencial para mejorar la situación ambiental en los Estados miembros agregando una capa adicional de protección al sistema. El derecho ambiental andino es de aplicación inmediata, por lo que no es necesario que los Estados miembros lo ratifiquen para que tenga efectos jurídicos, y cuenta con un Tribunal especializado para velar por su cumplimiento. El Tribunal Andino es considerablemente más rápido que muchos otros tribunales internacionales⁷⁹ y puede autorizar a los Estados miembros a tomar medidas comerciales de represalia contra los Estados miembros que no cumplan con sus decisiones⁸⁰. De hecho, no parece haber quejas generalizadas sobre la ejecución de sus decisiones⁸¹.

Su potencial se vuelve aún más claro cuando se compara con la Unión Europea y su Corte de Justicia. Si bien la Corte Europea opera

⁷⁸ Ver párrafo 2.1 de la Interpretación Prejudicial de fecha 17 de febrero de 2017 (Proceso 575-IP-2015).

⁷⁹ Por ejemplo, un caso ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede tramitarse durante casi dos décadas.

⁸⁰ Ver art. 27 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

⁸¹ Miguel Antonio Villamizar, *The Andean Court de Justice*, en: Robert Howse, Hélène Ruiz-Fabri, Geir Ulfstein, Michelle Zang (eds.), *The legitimacy de international trade courts and tribunals*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, p. 282.

en un contexto político, social y económico muy diferente, sirve para ilustrar las posibilidades que ofrecen los tribunales regionales de integración económica y política en materia ambiental. La Corte Europea y el Tribunal Andino son tribunales «hermanos», lo que significa que se basan en el mismo modelo y comparten características comunes en su funcionamiento.

La Corte Europea es la principal autoridad judicial que supervisa la aplicación e interpretación uniforme del derecho de la Unión Europea, que es una organización regional que comprende 27 Estados miembros. Aunque el derecho europeo inicialmente estaba enfocado en la integración económica, se ha ido expandiendo y ahora cubre una gran variedad de materias, incluyendo la protección ambiental y el desarrollo sostenible. La legislación ambiental europea tiende a ser muy técnica y específica, y muchos coinciden en que esta es la razón de su eficacia⁸². En consecuencia, con más de 1300 sentencias relacionadas a la protección del medio ambiente a finales de 2020⁸³, la contribución de la Corte Europea a la clarificación, a la interpretación y al desarrollo del derecho ambiental europeo no tiene precedentes.

En 2020, más del 20% de las acciones de incumplimiento contra los

⁸² Werner Scholtz y Jonathan Verschuuren, *Regional Environmental Law - Transregional Comparative Lessons in Pursuit of Sustainable Development*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2015, pp. 12-13. Ver también, Jonathan Verschuuren, *Contribution de the case law de the European Court de Human Rights to sustainable development in Europe*, en: Werner Scholtz y Jonathan Verschuuren (eds.), *Regional Environmental Law - Transregional Comparative Lessons in Pursuit of Sustainable Development*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2015, p. 385.

⁸³ Con más de 700 decisiones documentados hasta 2006 (ver, Francis Jacobs, *The Role de the European Court de Justice in the Protection de the Environment*, en: *Journal de Environmental Law*, 18 (2), 2006, p. 185), y 675 procedimientos de sanciones resultando de decisiones de incumplimiento relacionados con el medio ambiente entre 2007 y 2020 (ver, Directorate-General for the Environment, *Legal Enforcement Statistics on Environmental Infringements – Article 260 (previously 228) Cases*, 2021. Disponible en: <https://ec.europa.eu/environment/legal/law/statistics.htm> [Acceso: 25 de marzo de 2022]).

Estados miembros estaban relacionados con el medio ambiente⁸⁴. Es importante tener en cuenta que la Corte Europea no permite que entidades privadas inicien acciones de incumplimiento; este derecho recae únicamente en otros Estados miembros y la Comisión Europea⁸⁵. Sin embargo, la Comisión Europea ha estado arrastrando implacablemente a los Estados miembros ante la Corte Europea por incumplir con la normativa ambiental europea. Por ejemplo, la Corte Europea ha condenado a Bulgaria por exceder los límites máximos de dióxido de azufre en el aire contenidos en la Directiva 2008/50/CE⁸⁶, a Alemania por no remediar los niveles excesivamente altos de nitrato en sus aguas subterráneas⁸⁷, y a Polonia por prolongar el funcionamiento de una central de carbón, con graves consecuencias ambientales (este último caso es excepcional ya que fue presentado por otro Estado miembro)⁸⁸.

⁸⁴ Daniele de Bernardin, *EU infringement procedures: July 2020 update*, en: *European Data Journalism Network*, 22 de julio de 2020.
Disponible en:
<https://www.europeandatajournalism.eu/eng/News/Data-news/EU-infringement-procedures-July-2020-update> (Acceso: 25 de marzo de 2022).

⁸⁵ Ver arts. 258-259 de la Versión Consolidada del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea (adoptado el 25 de marzo de 1957, entrada en vigor el 1 de enero de 1958), publicado en el Official Journal of the European Union C 326 de fecha 26 de octubre de 2012.
Disponible en:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT>

⁸⁶ Sentencia de fecha 5 de abril de 2017 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) (Asunto C-488/15, Comisión Europea contra República de Bulgaria).
Disponible en:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62015CJ0488>

⁸⁷ Sentencia de fecha 21 de junio de 2018 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Novena) (Asunto C-543/16, Comisión Europea contra República Federal de Alemania).
Disponible en:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.285.01.0006.01.SPA

⁸⁸ Auto de fecha 21 de mayo de 2021 del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Orden de Medidas Cautelares) (Asunto C-121/21 R,

Algunas decisiones tienen un nivel de especificidad tan alto que incluso pueden parecer ridículas para algunos: por ejemplo, en 2011, Francia fue sentenciada por no tomar las medidas adecuadas para proteger al hámster europeo en Alsacia⁸⁹.

4.2. La protección ambiental en la Comunidad Andina – Obstáculos y propuestas

Como se demostró anteriormente, el Tribunal Andino ha mostrado una cautelosa tendencia a «enverdecer» el derecho comunitario andino en las áreas de comercio, agricultura y propiedad intelectual. Sin embargo, aun no se puede ver una implementación y ejecución del derecho ambiental comparable a la Unión Europea.

La primera (y más importante) razón para esto es la falta de legislación ambiental en la Comunidad Andina. Como se mostró arriba, la normativa ambiental andina es considerablemente más débil que otras áreas del derecho reguladas por la Comunidad. Debido a la *Reingeniería*, el desarrollo del derecho ambiental se encuentra estancado desde hace una década y la regulación de la materia ambiental a través de otras ramas del derecho ha resultado en un mosaico fragmentado de Decisiones inconexas y sin estrategia integrada. El resultado de este enfoque sectorial es un régimen ambiental que regula en detalle la prevención y el control de la necrosis hepatopancreática aguda en camarones⁹⁰, pero casi no tiene

República Checa contra República de Polonia).

Disponible en:

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:62021CO0121\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:62021CO0121(01))

⁸⁹ Sentencia de fecha 9 de junio de 2011 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta) (Asunto C-383/09, Comisión Europea contra República Francesa).

Disponible en:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:62009CJ0383>

⁹⁰ Resolución 1851 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 2739 del 20 de mayo de 2016.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetitas/GACE2739.pdf>

legislación sobre la protección de la biodiversidad, la mejora de la calidad del aire y del suelo, o la adaptación al cambio climático y su mitigación. Además, a diferencia de las normas andinas de propiedad intelectual, que son detalladas y precisas, las Decisiones en materia ambiental a menudo contienen vacíos y generalidades que incrementan la discrecionalidad de los Estados miembros⁹¹.

Como no existen normas ambientales que puedan ser violadas por los Estados miembros, la Secretaría General se ve imposibilitada de iniciar acciones de incumplimiento contra los Estados miembros, aunque lo quisiera. Sin legislación ambiental y partes dispuestas a hacer uso de los servicios del Tribunal para hacer cumplir su implementación, el Tribunal Andino permanecerá enfocado en las otras materias que han recibido mayor desarrollo, como es la propiedad intelectual, el comercio, los asuntos aduaneros y tributarios y la libre competencia.

Por lo tanto, el siguiente paso sería desarrollar Decisiones con obligaciones estatales específicas en materia ambiental. La Carta Ambiental Andina podría proporcionar un importante punto de partida. Por ejemplo, un objetivo acordado en la Carta es la gestión integral de los recursos hídricos. Los vertidos agrícolas, urbanos e industriales, han resultado en un grave deterioro de la calidad del agua en muchos Estados andinos⁹². Un próximo paso sensato podría implicar la mejora de la calidad del agua mediante la fijación de niveles límite de contaminación y procedimientos para las descargas agrícolas. Otro tema mencionado en la Carta Ambiental Andina es la promoción de la economía circular y la reducción de residuos. En este contexto, a modo de ejemplo, la Comunidad podría introducir normas y restricciones para el uso de bolsas de plástico. La Unión

⁹¹ Karen Alter y Laurence Helfer, *Transplanting International Courts: The Law and Politics of the Andean Tribunal de Justice*, Oxford University Press, Oxford, 2017, p. 139. Ver por ejemplo, arts. 15 y 20 de la Decisión 328 del la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

⁹² Ver por ejemplo, en el caso de Colombia (Flaminio Rueda Camberos, Walter Arboleda Girón, Norton Gutiérrez Pérez, *La calidad del agua de los acueductos de las áreas urbanas del departamento del Meta*, en: *Investigaciones Andina*, 19 [35], 2017, pp. 11–30).

Europea ya adoptó una Directiva que trata sobre el uso insostenible de bolsas de plástico⁹³, y la Comunidad de África Oriental está contemplando una prohibición total a nivel regional de los materiales de polietileno después de haber aprobado una serie de restricciones sobre estos materiales en 2017⁹⁴.

Además de establecer nuevas reglas ambientales, es importante abordar los otros dos obstáculos del Sistema Andino. En primer lugar, parece existir una falta considerable de conocimiento y comprensión del derecho comunitario y su funcionamiento en la sociedad civil y el sector de las ONG. El derecho comunitario, aun asociado con asuntos de comercio, aduanero y propiedad intelectual por gran parte de la comunidad jurídica en los Andes, y el funcionamiento del Tribunal Andino no son fáciles de entender para los abogados ambientales (que a menudo tienen experiencia en materia de derechos humanos o derecho constitucional). Por lo tanto, es importante fomentar aun más la participación civil en la Comunidad Andina. En este contexto, el establecimiento del Comité Andino de Autoridades Gubernamentales sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en 2022⁹⁵ para reemplazar al inactivo Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas creado en 2007 es un primer paso en la dirección correcta. Otras iniciativas podrían incluir la

⁹³ Directiva (EU) 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo (Por la que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras) (adoptada el 29 de abril de 2015), publicado en el Official Journal of the European Union L 115 de fecha 6 de mayo de 2015.

Disponible en:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32015L0720>

⁹⁴ Jonathan Cocker y Nkiruka Maduekwe, *Is the East African Community a Model for Plastics Pollution Strategy?*, en: *Environmental Law Insights*, 17 de Agosto de 2020.

Disponible en:

<https://www.environmentallawinsights.com/2020/08/17/is-the-east-african-community-a-model-for-plastics-pollution-strategy/> (Acceso: 25 de marzo de 2022)

⁹⁵ Karina Sotalín, *Cancilleres de la CAN acuerdan crear Comité enfocado en pueblos indígenas*, en: *El Comercio*, 26 de marzo de 2022.

Disponible en:

<https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/cancilleres-can-comite-pueblos-indigenas-paises.html> (Acceso: 8 de junio de 2022)

publicación de folletos que hagan que el derecho andino sea más accesible para los ciudadanos e indiquen los medios de participación pública en la toma de decisiones (ambientales).

En segundo lugar, debe reconocerse que el Tribunal ha desarrollado reglas bastante rígidas con respecto a la legitimación activa de las partes privadas. Según la propia jurisprudencia del Tribunal, los particulares solo pueden iniciar acciones de incumplimiento si se ven afectados en sus derechos subjetivos o intereses legítimos⁹⁶. Esta afectación de un derecho subjetivo, sin embargo, debe ser «actual, inmediata y directa»⁹⁷. Asimismo, el interés legítimo debe ser suficientemente relacionado con el demandante⁹⁸. La posibilidad de que el Tribunal no admita acciones de incumplimiento si es que el interesado solo acredita la afectación a un «interés difuso» podría por ahora limitar las opciones del litigio ambiental⁹⁹.

Sin embargo, esto no es definitivo si se toma en consideración que la jurisprudencia del Tribunal está en permanente evolución y, en el futuro, puede efectuar interpretaciones interesantes cuando el bien jurídico afectado sea el ambiente. En efecto, como la jurisprudencia del Tribunal sobre la legitimación activa ha oscilado en el pasado¹⁰⁰,

⁹⁶ Ver párrafo 1.7 de la Sentencia de fecha 7 de julio de 2017 (Proceso 01-AI-2015), publicada en la GOAC núm. 3100 del 25 de setiembre de 2017.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3100.pdf>

⁹⁷ *Ibidem.*

⁹⁸ *Ibidem.*

⁹⁹ Ver párrafo 3.1.16 de la Sentencia de fecha 3 de octubre de 2017 (Proceso 03-AI-2017), publicada en la GOAC núm. 3143 del 24 de noviembre de 2017.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3143.pdf>

Ver también la interpretación muy restrictiva en el Auto de fecha 19 de mayo de 2016 dentro del Proceso 01-RO-2015 (a través del cual se rechazó el Recurso por Omisión interpuesto por la Asociación Colombiana de la Industria de Grasas y Aceites Comestibles ASOGRASAS contra la Comisión de la Comunidad Andina).

¹⁰⁰ Compárese la jurisprudencia mencionada anteriormente con la jurisprudencia

no es impensable que el Tribunal introduzca criterios especiales para los casos ambientales si se enfrenta a uno. Adicionalmente a ello, hay que recordar que el Tribunal ha reconocido la aplicación del principio de justicia material en las acciones de nulidad¹⁰¹. Si dicho principio, bastante aplicado en el derecho ambiental, también se aplicara a las acciones de incumplimiento en materia ambiental, podemos augurar un futuro jurisprudencial que refuerce la protección ambiental.

En consecuencia, el litigio ambiental dependerá en gran medida de las futuras obligaciones ambientales que se incorporen en nuevas Decisiones andinas, en la voluntad de la Secretaría General de presentar casos contra los Estados miembros y en la futura jurisprudencia del Tribunal, la que puede adaptar sus actuales criterios jurídicos interpretativos a la peculiar protección del ambiente (como es la legitimación activa ante la afectación de «intereses difusos»). También podría ser una opción hacer campaña para que se le otorgue la legitimación activa al Parlamento Andino para que actúe como «guardián» junto a la Secretaría General.

5. Conclusión

La Comunidad Andina presenta una situación peculiar: proporciona poderosas estructuras supranacionales que, desde el punto de vista ambiental, por ahora no resultan muy activas. Del mismo modo, aunque el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina haya reconocido explícitamente la protección del medio ambiente como un objetivo de la Comunidad Andina, sin el desarrollo del derecho comunitario regional, se relegará al Tribunal a «supervisar un sitio

en la Sentencia de fecha 1 de febrero de 2002 (Proceso 14-AN-2001), publicada en la GOAC núm. 773 del 18 de marzo de 2002.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE773.PDF>

¹⁰¹ Ver párrafos 3.2.7.-3.3.1.3 del Auto de fecha 27 de junio de 2022 (Proceso 03-AN-2021), publicada en la GOAC núm. 4493 del 27 de junio de 2022.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta 4493.pdf>

de construcción vacío»¹⁰².

Sin embargo, a medida que los Estados miembros andinos están mostrando iniciativas para reactivar el desarrollo del derecho ambiental andino, las ONG y los defensores ambientales tienen una oportunidad única para impulsar la agenda ambiental de la Comunidad. La Carta Ambiental Andina constituye un buen punto de partida, pero es crucial el desarrollo de Decisiones específicas en materia ambiental, incluyendo estándares comunes y precisos para las emisiones industriales, la calidad del aire y del agua, o la protección de los ecosistemas compartidos. La experiencia europea muestra que el derecho y la jurisprudencia comunitarios regionales tienen un gran potencial para avanzar la protección del medio ambiente. La Comunidad Andina tiene una capacidad similar para emitir actos normativos ejecutables y altamente específicos; y su familiaridad con reglamentos técnicos administrativos puede proporcionarle una ventaja sobre las instituciones que aplican derechos humanos o derechos constitucionales imprecisos. Más importante aún, estos estándares también serían aplicables ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Para no perder este impulso, las ONG, los ecologistas y los académicos harían bien en involucrarse más en la Comunidad Andina. Es importante entender que se trata de un mecanismo que permite a los actores privados demandar a un Estado miembro si este no está cumpliendo con el derecho ambiental comunitario. Además, mientras que la sociedad civil puede estar ignorando el derecho andino, los actores comerciales ciertamente no lo hacen¹⁰³. Asimismo, se esperaría que los tribunales nacionales y las agencias administrativas se animen a remitir solicitudes de interpretación

¹⁰² Karen Alter y Liesbet Hooghe, *Regional Dispute Settlement*, en: Tanja Börzel, Thomas Risse (eds.), *The Oxford Handbook de Comparative Regionalism*, Oxford University Press, Oxford, 2016, p. 547 (traducción propia).

¹⁰³ Por ejemplo, la normativa sobre el control de plaguicidas mencionado antes muy probablemente se relajó como consecuencia de las actividades lobistas de las asociaciones campesinas (ver Karen Alter, Laurence Helfer, Mikael Rask Madsen, *International Court Authority*, Oxford University Press, Oxford, 2018, p. 186).

prejudicial sobre asuntos ambientales al Tribunal para contribuir al desarrollo de un marco legal sólido. Generalmente, si el tema medioambiental es abordado en la Comunidad Andina, esto agregaría un nivel adicional de protección y medios complementarios para la implementación y eficacia de la legislación ambiental.

Los principios que rigen al derecho andino (supremacía, aplicación directa, efecto directo), el carácter supranacional del Tribunal Andino y la obligatoriedad de sus sentencias abren una interesante oportunidad para reforzar en el futuro la protección ambiental en la Comunidad Andina. Lo que se necesita es que a través de Decisiones de la Comisión se hagan efectivos, obligatorios y concretos los compromisos asumidos en la Carta Ambiental Andina. Toda medida de protección ambiental que se incorpore en una Decisión se convierte en una obligación jurídica para los Estados miembros, por lo que su incumplimiento podrá ser demandado ante el Tribunal Andino, el guardián del derecho comunitario andino.

Si los ciudadanos, académicos y las ONG ambientalistas sienten que hoy sus reclamos no son atendidos ante las instancias y autoridades nacionales, la alternativa es acudir al derecho supranacional comunitario andino, el cual contiene herramientas que permiten forzar a los países a cumplir los compromisos asumidos. La idea, por tanto, es que determinadas medidas de protección ambiental se trasladen de las legislaciones nacionales hacia el ordenamiento jurídico andino, de modo que, si dichas medidas no son cumplidas, los interesados (legitimados activos) puedan demandar a los Estados miembros y exigir el cumplimiento de tales medidas, lo que reforzará la protección ambiental para beneficio de las generaciones presentes y futuras.

6. Bibliografía

Legislación

- Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), a la fecha, codificado por la Decisión 563 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en

la GOAC núm. 940 del 1 de julio de 2003.

Disponible en:

https://www.tribunalandino.org.ec/wp-content/uploads/2019/06/Acuerdo_Cartagena.pdf

- Carta Ambiental Andina adoptada por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de fecha 01 de diciembre de 2020.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/notas-de-prensa/carta-ambiental-andina/> (Acceso: 08 de junio de 2022)

- Decisión 182 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en la GOAC núm. 2 del 07 de setiembre de 1983.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/decisiones/DECI82.doc>

- Decisión 197 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en la GOAC núm. 5 del 06 de marzo de 1984.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/decisiones/DECI197.doc>

- Decisión 328 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en la GOAC núm. 118 del 30 de octubre de 1992.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace118.pdf>

- Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en el GOAC núm. 142 de 29 de octubre de 1993.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace142.pdf>

- Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en la GOAC núm. 142 de 29 de octubre de 1993.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace142.pdf>

- Decisión 376 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en la GOAC núm. 178 de 21 de abril de 1995.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace178.pdf>

- Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en la GOAC núm. 213 de 17 de julio de 1996.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace213.pdf>

- Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en reunión ampliada, con los representantes titulares ante la Comisión, publicada en la GOAC núm. 314 del 18 de diciembre de 1997.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace314.pdf>

- Decisión 435 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 347 del 17 de junio de 1998.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace347.pdf>

- Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 347 del 17 de junio de 1998.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace347.pdf>

- Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 600 del 19 de setiembre de 2000.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace600.pdf>

- Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, publicada en la GOAC núm. 680 del 28 de junio de 2001.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE680.PDF>

- Decisión 515 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 771 del 14 de marzo de 2002.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE771.PDF>

- Decisión 519 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 803 del 10 de junio de 2002.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace803.pdf>

- Decisión 523 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, publicada en la GOAC núm. 813 del 09 de julio de 2002.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace813.pdf>

- Decisión 529 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, publicada en la GOAC núm. 814 del 09 de julio de 2002.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/>

[Gacetas/Gace814.pdf](#)

- Decisión 596 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en reunión ampliada con la Comisión, publicada en la GOAC núm. 1092 del 16 de julio de 2004.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1092.pdf>

- Decisión 699 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 1679 del 10 de diciembre de 2008.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1679.pdf>

- Decisión 713 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, publicada en la GOAC núm. 1742 del 21 de agosto de 2009.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1742.pdf>

- Decisión 735 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 1841 del 08 de junio de 2010.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1841.pdf>

- Decisión 737 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 1841 del 08 de junio de 2010.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1841.pdf>

- Decisión 754 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 1948 del 31 de mayo de 2011.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1948.pdf>
- Decisión 762 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, publicada en la GOAC núm. 1972 del 23 de agosto de 2011.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1972.pdf>
- Decisión 763 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, publicada en la GOAC núm. 1972 del 23 de agosto de 2011.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1972.pdf>
- Decisión 774 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, reunido en forma ampliada con los representantes titulares ante la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 2103 del 10 de octubre de 2012.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2103.pdf>
- Decisión 792 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, reunido en forma ampliada con los representantes titulares ante la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 2238 del 23 de setiembre de 2013.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2238.pdf>

- Decisión 793 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 2280 del 16 de diciembre de 2013.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2280.pdf>

- Decisión 797 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en reunión ampliada con los representantes titulares ante la Comisión, publicada en la GOAC núm. 2400 del 15 de octubre de 2014.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2400.pdf>

- Decisión 804 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 2493 del 28 de abril de 2015.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2493.pdf>

- Decisión 808 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 2710 del 13 de abril de 2016.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2710.pdf>

- Decisión 814 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 2841 del 04 de noviembre de 2016.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2841.pdf>

- Decisión 884 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, reunido en forma ampliada con los representantes titulares ante la Comisión de la

Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 3649 del 29 de mayo de 2019.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA3649.pdf>

- Directiva (EU) 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo (Por la que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras), adoptada el 29 de abril de 2015, publicado en el Official Journal of the European Union L 115 de fecha 06 de mayo de 2015.

Disponible en:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32015L0720>

- Resolución 630 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 810 del 26 de junio de 2002.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace810.pdf>

- Resolución 1160 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 1615 del 05 de mayo de 2008.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1615.pdf>

- Resolución 1430 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 1970 del 19 de agosto de 2011.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1970.pdf>

- Resolución 1586 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 2201

del 24 de mayo de 2013.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2201.pdf>

- Resolución 1588 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 2204 del 28 de mayo de 2013.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2204.pdf>

- Resolución 1791 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 2535 del 14 de julio de 2015.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2535.pdf>

- Resolución 1851 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 2739 del 20 de mayo de 2016.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2739.pdf>

- Resolución 1970 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 3159 del 12 de diciembre de 2017.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3159.pdf>

- Resolución 2075 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 3709 del 02 de agosto de 2019.

Disponible en:

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta_3709.pdf

- Resolución 2197 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 4229 del 30 de abril de 2021.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta 4229.pdf>
- Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la GOAC núm. 483 del 17 de setiembre de 1999.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace483.pdf>
- Versión Consolidada del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea (adoptado el 25 de marzo de 1957, entrada en vigor el 01 de enero de 1958), publicado en el Official Journal of the European Union C 326 de fecha 26 de octubre de 2012.
Disponible en:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT>

Jurisprudencia

- Auto de fecha 19 de mayo de 2016 dentro del Proceso 01-RO-2015 (a través del cual se rechazó el Recurso por Omisión interpuesto por la Asociación Colombiana de la Industria de Grasas y Aceites Comestibles ASOGRASAS contra la Comisión de la Comunidad Andina).
- Auto de fecha 21 de mayo de 2021 del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Orden de Medidas Cautelares) (Asunto C-121/21 R, República Checa contra República de Polonia).
Disponible en:
<https://eur-lex.europa.eu/legal->

- Auto de fecha 27 de junio de 2022 (Proceso 03-AN-2021), publicada en la GOAC núm. 4493 del 27 de junio de 2022.
Disponible en:
[https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta 4493.pdf](https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204493.pdf)

- Interpretación Prejudicial de fecha 27 de octubre de 2000 (Proceso 21-IP-2000), publicada en la GOAC núm. 631 del 10 de enero de 2001.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE631.PDF>

- Interpretación Prejudicial de fecha 02 de febrero de 2005 (Proceso 157-IP-2004), publicada en la GOAC núm. 1175 del 15 de marzo de 2005.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1175.pdf>

- Interpretación Prejudicial de fecha 14 de mayo de 2008 (Proceso 045-IP-2008), publicada en la GOAC núm. 1641 del 31 de julio de 2008.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1641.pdf>

- Interpretación Prejudicial de fecha 22 de agosto de 2008 (Proceso 90-IP-2008), publicada en la GOAC núm. 1662 del 09 de octubre de 2008.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1662.pdf>

- Interpretación Prejudicial de fecha 25 de febrero de 2010 (Proceso 115-IP-2009), publicada en la GOAC núm.

1828 del 30 de abril de 2010.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1828.pdf>

- Interpretación Prejudicial de fecha 29 de abril de 2010 (Proceso 114-IP-2009), publicada en la GOAC núm. 1860 del 04 de agosto de 2010.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1860.pdf>

- Interpretación Prejudicial de fecha 06 de junio de 2012 (Proceso 19-IP-2012), publicada en la GOAC núm. 2097 del 26 de setiembre de 2012. Este caso sobre un logo similar para un perfume y un herbicida.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2097.pdf>

- Interpretación Prejudicial de fecha 24 de octubre de 2012 (Proceso 60-IP-2012), publicada en la GOAC núm. 2157 del 27 de febrero de 2013.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2157.pdf>

- Interpretación Prejudicial de fecha 13 de noviembre de 2012 (Proceso 116-IP-2012), publicada en la GOAC núm. 2161 del 08 de marzo de 2013.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2161.pdf>

- Interpretación Prejudicial de fecha 30 de abril de 2014 (Proceso 15-IP-2014), publicada en la GOAC núm. 2355 del 30 de junio de 2014.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/>

[Gacetas/GACE2355.pdf](#)

- Interpretación Prejudicial de fecha 20 de noviembre de 2014 (Proceso 121-IP-2014), publicada en la GOAC núm. 2427 del 11 de diciembre de 2014.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2427.pdf>

- Interpretación Prejudicial de fecha 28 de noviembre de 2014 (Proceso 105-IP-2014), publicada en la GOAC núm. 2459 del 04 de marzo de 2015.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2459.pdf>

- Interpretación Prejudicial de fecha 17 de febrero de 2017 (Proceso 575-IP-2015), publicada en la GOAC núm. 2968 del 15 de marzo de 2017.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2968.pdf>

- Interpretación Prejudicial de fecha 17 de febrero de 2017 (Proceso 669-IP-2015), publicada en la GOAC núm. 2969 del 16 de marzo de 2017.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2969.pdf>

- Interpretación Prejudicial de fecha 04 de mayo de 2017 (Proceso 272-IP-2016), publicada en la GOAC núm. 3722 del 08 de agosto de 2019.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203722.pdf>

- Interpretación Prejudicial de fecha 06 de mayo de 2022 (Proceso 426-IP-2019), publicada en la GOAC núm.

4487 del 02 de junio de 2022.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204487.pdf>

- Sentencia de fecha 3 de diciembre de 1987 (Proceso 1-IP-87), publicada en la GOAC núm. 28 del 15 de febrero de 1988.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/1-IP-87.doc>

- Sentencia de fecha 30 de octubre de 1996 (Proceso 1-AI-96), publicada en la GOAC núm. 234 del 21 de noviembre de 1996.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace234.pdf>

- Sentencia de fecha 24 de marzo de 1997 (Proceso 3-AI-96), publicada en la GOAC núm. 261 del 29 de abril de 1997.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace261.pdf>

- Sentencia de fecha 11 de diciembre de 1997 (Proceso 1-AI-97), publicada en la GOAC núm. 329 del 9 de marzo de 1998.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace329.pdf>

- Sentencia de fecha 26 de febrero de 1998 (Proceso 1-AN-97), publicada en la GOAC núm. 340 del 13 de mayo de 1998.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace340.pdf>

- Sentencia de fecha 08 de junio de 1998 (Proceso 5-AN-97), publicada en la GOAC núm. 361 del 07 de agosto de 1998.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace361.pdf>

- Sentencia de fecha 12 de noviembre de 1999 (Proceso 07-AI-99), publicada en la GOAC núm. 520 del 20 de diciembre de 1999.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace520.pdf>

- Sentencia de fecha 01 de febrero de 2002 (Proceso 14-AN-2001), publicada en la GOAC núm. 773 del 18 de marzo de 2002.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE773.PDF>

- Sentencia de fecha 27 de enero de 2009 (Proceso 05-AI-2008).

- Sentencia de fecha 9 de junio de 2011 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta) (Asunto C-383/09, Comisión Europea contra República Francesa).

Disponible en:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:62009CJ0383>

- Sentencia de fecha 22 de junio de 2011 (Proceso 02-AI-2010), publicada en la GOAC núm. 1973 del 26 de agosto de 2011.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1973.pdf>

- Sentencia de fecha 19 de julio de 2012 (Proceso 01-AI-2011), publicada en la GOAC núm. 2086 del 27 de agosto de 2012.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2086.pdf>
- Sentencia de fecha 16 de julio de 2013 (Proceso 01-AI-2012), publicada en la GOAC núm. 2265 del 03 de diciembre de 2013.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2265.pdf>
- Sentencia de fecha 26 de agosto de 2016 (Proceso 02-AN-2015), publicada en la GOAC núm. 2810 del 15 de setiembre de 2016.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2810.pdf>
- Sentencia de fecha 05 de abril de 2017 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Tercera) (Asunto C-488/15, Comisión Europea contra República de Bulgaria).
Disponible en:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62015CJ0488>
- Sentencia de fecha 07 de julio de 2017 (Proceso 01-AI-2015), publicada en la GOAC núm. 3100 del 25 de setiembre de 2017.
Disponible en:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3100.pdf>
- Sentencia de fecha 03 de octubre de 2017 (Proceso 03-AI-2017), publicada en la GOAC núm. 3143 del 24 de noviembre de 2017.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3143.pdf>

- Sentencia de fecha 21 de junio de 2018 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Novena) (Asunto C-543/16, Comisión Europea contra República Federal de Alemania).

Disponible en:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.285.01.0006_01.SPA

- Sentencia de fecha 23 de agosto de 2018 (Proceso 01-AN-2015), publicada en la GOAC núm. 3369 del 13 de setiembre de 2018.

Disponible en:

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta_3369.pdf

Literatura

- Alter, Karen; Helfer, Laurence, *Transplanting International Courts: The Law and Politics of the Andean Tribunal de Justice*, Oxford University Press, Oxford, 2017.
- Alter, Karen; Helfer, Laurence; Madsen, Mikael Rask, *International Court Authority*, Oxford University Press, Oxford, 2018.
- Alter, Karen; Hooghe, Liesbet, *Regional Dispute Settlement*, en: Tanja Börzel, Thomas Risse (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Regionalism*, Oxford University Press, Oxford, 2016, pp. 538–558.
- Bernardin, Daniele de, *EU infringement procedures: July 2020 update*, en: *European Data Journalism Network*, 22 de julio de 2020.

Disponibile en:

<https://www.europeandatajournalism.eu/eng/News/Data-news/EU-infringement-procedures-July-2020-update>

(Acceso: 25 de marzo de 2022).

- Cocker, Jonathan; Maduekwe, Nkiruka, *Is the East African Community a Model for Plastics Pollution Strategy?*, en: *Environmental Law Insights*, 17 de Agosto de 2020.

Disponibile en:

<https://www.environmentlawinsights.com/2020/08/17/is-the-east-african-community-a-model-for-plastics-pollution-strategy/>

(Acceso: 25 de marzo de 2022)

- Directorate-General for the Environment, *Legal Enforcement Statistics on Environmental Infringements – Article 260 (previously 228) Cases*, 2021.

Disponibile en:

<https://ec.europa.eu/environment/legal/law/statistics.htm>

(Acceso: 25 de marzo de 2022)

- Figueroa Hernández, Ariadna; Hernández Benítez, Yendry, *Los Derechos de Propiedad Intelectual y el Medioambiente: Las Negociaciones sobre el Cambio Climático*, en: *Revista la Propiedad Inmaterial*, 28, 2019, pp. 43-72.

- Gómez Apac, Hugo R.; Solines Moreno, Daniel; Rodríguez Noblejas, Karla, *Desafíos de la propiedad intelectual en el marco del proceso de integración andina*, primera edición, Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual – AEPI, Quito, 2019.

- Jacobs, Francis, *The Role de the European Court de Justice in the Protection de the Environment*, en: *Journal de Environmental Law*, 18 (2), pp. 185–205.

- Jiménez, William Guillermo, *Papel de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en*

Decisiones Judiciales de los Países Miembros, en: *Revista Colombiana de Derecho Internacional*, 23, 2013, pp. 87-118.

- Ministerio del Ambiente de Perú, *Diálogos Ambientales con la Prensa - Minería Ilegal*, 2013.
Disponible en:
<https://www.minam.gob.pe/prensa/dialogos-ambientales/dialogos-ambientales-mineria-ilegal-y-mineria-informal/> (Acceso: 08 de junio de 2022)
- Molano-Cruz, Giovanni; Kingah, Stephen, *Addressing Human Rights in the Court de Justice de the Andean Community and the Tribunal de the Southern African Development Community*, en: *Colombia Internacional*, 81, 2014, pp. 99-127.
- Ponce de León, Eugenia, *Temas de Derecho Comunitario Ambiental Andino*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001.
- Rueda Camberos, Flaminio; Arboleda Girón, Walter; Gutiérrez Pérez, Norton, *La calidad del agua de los acueductos de las áreas urbanas del departamento del Meta*, en: *Investigaciones Andina*, 19 (35), 2017, pp. 11–30.
- Scholtz, Werner; Verschuuren, Jonathan, *Regional Environmental Law - Transregional Comparative Lessons in Pursuit de Sustainable Development*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2015.
- Sotalín, Karina, *Cancilleres de la CAN acuerdan crear Comité enfocado en pueblos indígenas*, en: *El Comercio*, 26 de marzo de 2022.
Disponible en:
<https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/cancilleres-can-comite-pueblos-indigenas-paises.html>
(Acceso: 08 de junio de 2022)

- Tafur Dominguez, Victor, *International Environmental Harmonization - Emergence and Development de the Andean Community*, en: *Pace International Law Review*, 12(2), 2000, pp. 283–318.
- Vargas Mendoza, Marcelo, *El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Defensa de los Derechos Humanos*, en: Claudia Escobar García (ed.), *Teoría y práctica de la justicia constitucional*, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Quito, Quito, 2010, pp. 469–502.
- Verschuuren, Jonathan, *Contribution de the case law de the European Court de Human Rights to sustainable development in Europe*, en: Werner Scholtz y Jonathan Verschuuren (eds.), *Regional Environmental Law - Transregional Comparative Lessons in Pursuit de Sustainable Development*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2015, pp. 363–385.
- Villamizar, Miguel Antonio, *The Andean Court de Justice*, en: Robert Howse, Hélène Ruiz-Fabri, Geir Ulfstein, Michelle Zang (eds.), *The legitimacy de international trade courts and tribunals*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, pp. 255-285.

7. Declaración de intereses

La autora declara que no existen conflictos de interés.

8. Agradecimiento

A través de estas líneas quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que me han apoyado en mi investigación, especialmente a los Magistrados Hugo Ramiro Gómez Apac y Gustavo García Brito del Tribunal Andino, al Secretario General del Tribunal, Luis Felipe Aguilar Feijoó, y a Karla Margot Rodríguez Noblejas. Extendiendo mis agradecimientos también a mi supervisora, la Prof. Silja Vöneky de

la Universidad de Friburgo en Alemania y a la Fundación Alemana del Medio Ambiente (*Deutsche Bundesstiftung Umwelt*) por su generosa financiación de mi investigación. También agradezco a Carlos Garcés por la revisión de la traducción al castellano del documento original redactado en inglés.

Esta investigación forma parte de mi proyecto de tesis doctoral en proceso ('Environmental Litigation before Regional International Courts in Africa and Latin America').

ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE ANDEAN COMMUNITY

Sonja Kahl¹

1. Introduction

Among environmentalists, the Andean Community (hereinafter referred to as **CAN** or **Community**) has not made itself a name – which is not entirely surprising, inasmuch the supranational community consisting of Bolivia, Colombia, Ecuador, and Peru (and Venezuela until 2006) has to date chosen to focus on liberalizing and integrating trade relations between the members. Founded in 1969 by the Cartagena Agreement² and later reformed by the Trujillo Protocol of 1997,³ the CAN forms the structural basis of an imperfect customs union. Initially created with the aim of regulating matters of trade and investment, the Community now coordinates a wide array of issues, including intellectual property, agriculture, physical integration (transport, electric interconnection, telecommunications), and social aspects (migration and mobility, education, culture, Andean citizenship).

However, as this article intends to show, the CAN could also provide a powerful platform for environmental protection. Its capacity to issue rules that are legally binding and immediately applicable in all member states could add a supplementary level of protection. Moreover, the fact that the enforcement of Andean community law can be claimed before the Court of Justice of the Andean Community

¹ University of Freiburg (Germany).

² Signed on May 26, 1969. Andean Subregional Integration Agreement (**Cartagena Agreement**), as of today, codified by Decision 563 of the Commission of the Andean Community, published in the Official Gazette of the Cartagena Agreement (**OGCA**) No. 940 of July 1, 2003.
Available at:
https://www.tribunalandino.org.ec/wp-content/uploads/2019/06/Acuerdo_Cartagena.pdf

³ Modifying Protocol to the Andean Subregional Integration Agreement (Cartagena Agreement), approved in Trujillo, Peru, on March 10, 1996.

(hereinafter referred to as the **TJCA** or the **Court**) could improve the actual implementation of environmental law – effective means of implementation being of dire need in the subregion.

After briefly introducing the functioning of the Community and its Court, this paper will shed some light on the existing environmental framework, including the jurisprudence of the TJCA (2). Although it is my hope that this article will be able to illustrate that there indeed is a connection between environmental protection and the activities of the CAN, the analysis will show that there is currently no integral and coherent system of Andean environmental law, which remains in an underdeveloped and fragmented state. The Court has recognized environmental protection as a goal of the Community and made attempts to “green” Andean trade and agrarian law, but its potential is limited significantly by the lack of environmental law (3). However, precisely at this point in time, environmental non-governmental organizations (NGOs), activists and academics are presented with a unique time window to push for the development of Andean environmental law and contribute to the creation of effective structures on a supranational level. The comparison with the European Union further illustrates the potential of Andean structures for environmental protection on the region (4).

2. The Andean Community and its Court of Justice

Andean law is constituted by primary and secondary law. Primary legislation refers to the treaties relating to Andean integration concluded between the member states and ratified by them, as well as protocols and additional instruments directly modifying them. Secondary legislation consists of law issued by the Andean community organs, such as Decisions (*Decisiones*) of the Counsel of Foreign Ministers (*Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, CAMRE*) and the Andean Commission, and Resolutions (*Resoluciones*) of the General Secretariat.⁴

⁴ See Articles 1 and 2 of the Statute of the Court of Justice of the Andean Community, approved by Decision 500 of the Andean Council of Foreign Ministers, published in OGCA No. 680 of June 28, 2001.
Available at:

Andean law features important supranational characteristics: autonomy, immediate application, direct effect, and supremacy over domestic law. According to Articles 2 and 3 of the Statute of the Court⁵, Andean community law is immediately applicable without requiring any prior ratification or validation by parliament or any other national authority (*immediate applicability*) and it may, if sufficiently specific, confer rights on individuals that domestic authorities are bound to enforce (*direct effect*).⁶ *Supremacy* implies that Andean law prevails over any national law, and member states are obliged to take all necessary measures to ensure compliance with Andean community law.⁷ Member states are allowed to enact domestic laws in areas governed by Andean law, as long as these measures do not conflict with or undermine community law

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetatas/GACE680.PDF>

See also Judgment dated November 12, 1999 (Case 07-AI-99), published in OGCA No. 520 of December 20, 1999.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetatas/gace520.pdf>

⁵ Statute of the Court of Justice of the Andean Community.

⁶ See Judgment dated December 3, 1987 (Case 1-IP-87), published in OGCA No. 28 of February 15, 1988.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/1-IP-87.doc>

See also Judgment dated November 12, 1999 (Case 07-AI-99), published in OGCA No. 520 of December 20, 1999.

⁷ *Ibidem*.

See also Judgment dated March 24, 1997 (Case 3-AI-96), published in OGCA No. 261 of April 29, 1997.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetatas/gace261.pdf>

Samewise, William Guillermo Jiménez, *Papel de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Decisiones Judiciales de los Países Miembros*, in: *Revista Colombiana de Derecho Internacional*, 23, 2013, pp. 104-105.

(*complemento indispensable doctrine*).⁸ Due to these supranational characteristics, the Andean Community is often considered to be the most robust subregional international organization in Latin America and the Caribbean.⁹

Although the Andean Community is characterized by supranationality, in some way, by a higher degree of intergovernmentalism, it is clearly inspired by the European Union. More importantly, it has adopted its supranational legal structure (discussed later). Institutionally, the Community has its own bodies such as a Council of Presidents, a Council of Ministers of Foreign Affairs, a regional Parliament, a General Secretariat and its own Court of Justice, who oversees the correct interpretation and application of community law.

For the purposes of this article, it is worth pointing out three of the most important competences of the Andean Tribunal. Firstly, in the infringement proceeding (*acción de incumplimiento*), the Tribunal is empowered to examine the alleged violation of Andean community law by a member state.¹⁰ The Court itself has emphasized the key role of the infringement proceeding for the control of state conduct.¹¹

⁸ See paragraphs 45 and 46 of the Prejudicial Interpretation dated April 30, 2014 (Case 15-IP-2014), published in OGCA No. 2355 of June 30, 2014.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetatas/GACE2355.pdf>

⁹ Giovanni Molano-Cruz and Stephen Kingah, *Addressing Human Rights in the Court de Justice de the Andean Community and the Tribunal de the Southern African Development Community*, in: *Colombia Internacional*, 81, 2014, p. 103.

¹⁰ See Arts. 23-31 of the Treaty of Creation the Court of Justice of the Andean Community, codified by Decision 472 of the Commission of the Andean Community, published in OGCA No. 483 of September 17, 1999.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetatas/gace483.pdf>

See also Arts. 107-111 of the Statute of the Court of Justice of the Andean Community.

¹¹ “*Esta acción, establecida y regulada en los artículos 23 a 27 del Tratado de Creación constituye el instrumento por excelencia, mediante el cual el*

Secondly, in an annulment proceeding (*acción de nulidad*), the Court can examine whether an organ of the Andean Community has violated community law.¹² Both of these proceedings can be initiated by specific organs of the Community (such as the General Secretariat), another member state, and private entities if their subjective rights or legitimate interests are affected.¹³ In the case of infringement proceedings, private entities and member states must go through a pre-trial phase before the General Secretariat before being allowed to submit a case to the Tribunal.¹⁴

Thirdly, in a preliminary ruling (*acción de interpretación prejudicial*), the Andean Tribunal is empowered to issue an interpretation of Andean community law referred to it if a question on Andean law arises before a domestic court.¹⁵ The purpose is to ensure the uniform application of Andean law in the member

Tribunal está llamado a vigilar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los Países Miembros de acatar y no obstaculizar la aplicación de las normas que constituyen el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.” (“This action, established and regulated in Articles 23 to 27 of the Treaty of Creation, is the instrument par excellence by means of which the Court is called upon to monitor compliance with the obligations acquired by the Member Countries to abide by and not hinder the application of the rules that constitute the legal system of the Cartagena Agreement.”) (Judgment dated November 12, 1999 [Case 07-AI-99]).

¹² See Arts. 17-22 of the Treaty of Creation the Court of Justice of the Andean Community. See also, Arts. 101-104 of the Statute of the Court of Justice of the Andean Community

¹³ See Judgment dated August 23, 2018 (Case 01-AN-2015), published in OGCA No. 3369 of September 13, 2018.

Available at:

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetitas/Gaceta_3369.pdf

See also below on details on legal standing.

¹⁴ See Arts. 23-25 of the Treaty of Creation the Court of Justice of the Andean Community. See also Regulations of Administrative Procedures of the Andean Community.

¹⁵ *Ibidem*, Arts. 32-38 and Arts. 121-128, respectively.

states.¹⁶ Interpretation requests are optional for lower domestic courts, and mandatory for domestic courts of last instance.¹⁷ The TJCA will issue an abstract clarification or interpretation of the Andean rule in question, without deciding on the specific underlying domestic dispute.¹⁸ The decision of the Andean Tribunal will be referred back to the domestic courts, which must adopt the TJCA's interpretation when deciding the dispute before it.¹⁹

It is worth noting that a prejudicial interpretation can also be requested by administrative agencies, if these exercise "jurisdictional" functions, meaning that they emit an impartial and legally binding decision to solve a controversy between two parties.²⁰ Whereas, in the past, the Tribunal required that the administrative agency deal with a dispute between two private parties, it abandoned this criterion in the Case 426-IP-2019 and accepted that the underlying dispute may be between a private entity and an administrative body.²¹ The practical consequence is that a

¹⁶ *Ibidem*, Arts. 32 and Arts. 121, respectively.

¹⁷ *Ibidem*, Arts. 33 and Arts. 122-123, respectively.

¹⁸ *Ibidem*, Arts. 34 and Arts. 126, respectively.

¹⁹ *Ibidem*, Arts. 35 and Arts. 127, respectively.

See also Prejudicial Interpretation dated February 2, 2005 (Case 157-IP-2004), published in OGCA No. 1175 of March 15, 2005.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1175.pdf>

²⁰ See paragraphs 22-29 of the Prejudicial Interpretation dated November 20, 2014 (Case 121-IP-2014), published in OGCA No. 2427 of December 11, 2014.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2427.pdf>

See also Prejudicial Interpretation dated November 28, 2014 (Case 105-IP-2014), published in OGCA No. 2459 of March 4, 2015.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2459.pdf>

²¹ See paragraph 18 of the Prejudicial Interpretation dated May 6, 2022 (Case 426-IP-2019), published in OGCA No. 4487 of June 2, 2022.

prejudicial interpretation can also be requested by most environmental agencies.

3. Andean Environmental Legislation and Jurisprudence

As mentioned above, Andean law now regulates a variety of subject matters. However, its strongest normative acts still relate to trade and intellectual property matters, while environmental legislation remains severely underdeveloped. Similarly, although the Andean Tribunal has the competence and task to ensure that member states comply with Andean community law – including environmental law – it has to date not issued any significant environmental jurisprudence, and approximately 90% of its decisions relate to intellectual property matters.²²

3.1. Andean environmental law

As environmental protection was not a priority at the time of adoption of the Cartagena Agreement, references to the environment feature only sporadically. For instance, Art. 1 establishes the promotion of a “balanced and harmonious development” as one the Community’s main objectives, and Art. 3 sets out that states shall be taking “actions for the use and conservation of natural resources and the environment”.²³ Several other references are made to sustainability in the context of industry,²⁴ trade,²⁵ and agriculture.²⁶

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetitas/Gaceta%204487.pdf>

²² Hugo R. Gómez Apac, Daniel Solines Moreno, Karla Rodríguez Noblejas, *Desafíos de la propiedad intelectual en el marco del proceso de integración andina*, first edition, Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual - AEPI, Quito, 2019, p. 10.

²³ Art. 3 (Paragraph 2 (d)) of the Cartagena Agreement.

²⁴ *Ibidem*, Art. 60(c).

²⁵ *Ibidem*, Art. 73(2)(d).

²⁶ *Ibidem*, Arts. 87(a), 88(f, h).

Moreover, the Agreement contains the important Art. 128, which provides that “[t]he member states shall undertake joint actions to allow greater use of their renewable and non-renewable natural resources and the conservation and improvement of the environment”. However, the Agreement does not contain an autonomous chapter dedicated to environmental protection, considering it only an aspect of economic and social cooperation more in general.²⁷

The lack of environmental legislation extends into the domain of secondary law. The most important *Decisión* 182²⁸ dates back to 1983, the “Jose Celestino Mutis” system on agriculture, food security and environmental conservation. It aims at harmonizing agricultural practices and preserving the environment and requires the member states to engage in the rational use and management of forests, pastures and hydrographic basins, protect the marine environment from pollution, and engage in environmental education and awareness-raising.

Other legal acts include *Decisión* 435 (1998), creating the Andean Committee of Environmental Authorities (CAAAM), *Decisión* 523 (2002) approving the Regional Biodiversity Strategy (2002), *Decisión* 529 (2002) creating the Andean Committee for the Prevention and Attention of Disasters, *Decisión* 596 (2004) creating the Council of Ministers of Environment and Sustainable Development of the Andean Community, *Decisión* 699 (2008) on environmental indicators, *Decisión* 713 (2009) on the Andean Strategy for the Prevention and Attention of Disasters, *Decisión* 762 (2011) on the Climate Change Adaptation Program, and *Decisión* 763 (2011) on the Andean Strategy on Integrated Water Resources Management.

²⁷ Eugenia Ponce de León, *Temas de Derecho Comunitario Ambiental Andino*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001, pp. 95-102.

²⁸ Decision 182 of the Commission of the Cartagena Agreement dated July 25, 1983.
Available at:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/decisiones/DEC182.doc>

In 2013, in the context of the Community's "*Reingeniería*", the development of Andean environmental legislation came to an almost complete standstill, as certain thematic areas of integration were prioritized, whereas others – including the environment – were meant to become competence of the planned Union of South American Nations (UNASUR).²⁹ However, as the UNASUR project is heavily weakened, initiatives to reactivate the development of Andean environmental law have emerged in the Community. For example, in 2020, the Andean Environmental Charter was adopted, which includes a human right to a healthy and protected environment and identifies several common environmental objectives of the member states. Although the Charter is not legally binding, it could catalyze the development of Andean environmental community law.

3.2. Foreign Trade

It should be noted that the Andean Community has issued legal acts that, despite not being strictly considered environmental law, have relevance for the protection of the environment. This includes legislation in the areas of commerce, agriculture, intellectual property, and illegal mining.

In matters of commerce, Art. 72 of the Cartagena Agreement establishes a subregional free trade area (*Programa de Liberación*) and obliges member states to eliminate all barriers and restrictions to imports from other member states. Pursuant to Art. 73, exceptions can be made for measures aimed at protecting the life and health of

²⁹ Decision 792 of the Andean Council of Ministers of Foreign Affairs, meeting in an expanded form with the titular representatives to the Andean Community Commission, published in OGCA No. 2238 of September 23, 2013.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2238.pdf>

Decision 797 of the Andean Council of Foreign Ministers, meeting in expanded form with the incumbent representatives to the Commission, published in OGCA No. 2400 of October 15, 2014.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2400.pdf>

human, animals, and plants.³⁰ In this context, the Andean Tribunal has been required to find a balance between matters of public interest, such as human, animal and plant health, and commercial liberty.

For instance, the Tribunal has dealt with a Venezuelan import prohibition on Peruvian garlic, allegedly infested with a plague called the *onion smut*,³¹ or on Colombian coffee, supposedly affected by a parasite called *broca del café*.³² The Tribunal acknowledged a member state's right to restrict commerce to protect human, animal and plant health, but required that the restrictive measure be necessary, proportional and not discriminatory, and that there be no less restrictive alternative.³³ In addition, the state must follow the proceedings established by community law.³⁴

³⁰ Art. 73(d) of the Cartagena Agreement.

³¹ See page 11 of the Judgment dated December 11, 1997 (Case 1-AI-97), published in OGCA No. 329 of March 9, 1998.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace329.pdf>

See also p. 19 of the Judgment dated June 8, 1998 (Case 5-AN-97), published in OGCA No. 361 of August 7, 1998.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace361.pdf>

³² Judgment dated February 26, 1998 (Case 1-AN-97), published in OGCA No. 340 of May 13, 1998.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace340.pdf>

³³ See pp. 11-14 of the Judgment dated December 11, 1997 (Case 1-AI-97); pp. 32-33 and 40 of the Judgment dated February 26, 1998 (Case 1-AN-97); p. 19 of the Judgment dated June 8, 1998 (Case 5-AN-97).

This has been more recently confirmed in paragraphs 2.12-2.17 of the Prejudicial Interpretation dated 4 May 2017 (Case 272-IP-2016), published in OGCA No. 3722 of 8 August 2019.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203722.pdf>

³⁴ See for example Decision 328 of the Commission of the Cartagena Agreement, published in OGCA No. 118 of October 30, 1992.

The Tribunal has been bolder to acknowledge environmental interests in trade matters in more recent cases. In the Case 116-IP-2012 (*partes de vehículos usados*), which concerned a domestic dispute revolving around an import restriction on used vehicle parts to protect the environment, the Tribunal recognized that the rights to life, health, physical integrity, and a healthy environment constitute “general principles of Andean community laws”, and that relevant community law must be read in the light of these rights.³⁵

In Case 02-AN-2015 (CKDs), the Tribunal declared the partial nullity of two Resolutions of the General Secretariat of the Andean Community since they incorrectly qualified measures adopted by Ecuador as a restriction to intra-subregional trade. These measures established quantitative restrictions on the importation, in general, of vehicles and disassembled vehicle parts (Complete knock-down). The Tribunal explained that the measures adopted were not discriminatory and suitable for the mitigation of greenhouse gases from the vehicle fleet.³⁶ For the judges, the fact that the transport sector was only responsible for 3% of greenhouse gas emissions did not prevent Ecuador from adopting mitigation measures in said sector³⁷. In addition, the Court stated that the measures identified by the General Secretariat were not alternatives to the automotive sector but rather a complement. These proposed measures included the implementation of exclusive lanes for buses and the construction of

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace118.pdf>

³⁵ See pp. 8-10 of the Prejudicial Interpretation dated November 13, 2012 (Case 116-IP-2012), published in OGCA No. 2161 of March 8, 2013.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2161.pdf>

³⁶ See page 43 of the Judgment dated August 26, 2016 (Case 02-AN-2015), published in OGCA No. 2810 of September 15, 2016.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2810.pdf>

³⁷ *Ibidem*, paragraph 3.4.19.

bicycle lanes, among others³⁸.

3.3. Agrarian law

The Andean subregion's rich biodiversity is under constant threat by the advancing agricultural frontier, which is why environmental protection has always been closely related to the agricultural sector.³⁹ Also, joining the World Trade Organization required Andean states to establish joint sanitary and phytosanitary measures in order to protect themselves from animal and plant diseases.⁴⁰ Important normative acts include *Decisión 328* (1992) (later replaced by *Decisión 515* (2002)) and *Decisión 436* (1998) (later modified by *Decisión 804* (2015)) establishing the Andean Agricultural Health System, which determines the principles for the protection of plant and animal health. *Decisión 436* moreover introduced a system for the registration and control of chemical pesticides for agricultural use. Since 2000, Andean legislation on agriculture and sanitary and phytosanitary measures has expanded into a very detailed, specific, and technical legal system with a considerable density of regulation. This includes numerous *Decisiones* and *Resoluciones* engaged in the fight against specific animal diseases⁴¹ and setting the sanitary procedures for the

³⁸ *Ibidem*, paragraphs 3.4.27-3.4.28.

³⁹ Víctor Tafur Domínguez, *Armonización ambiental internacional - Surgimiento y desarrollo de la Comunidad Andina*, in: *Pace International Law Review*, 12(2), 2000, p. 308.

⁴⁰ *Ibidem*, p. 310. Also see Eugenia Ponce de León, *Temas de Derecho Comunitario Ambiental Andino*, Universidad Externado de Colombia, Bogota, 2001, pp. 92-94.

⁴¹ See, for example:

Decision 519 of the Commission of the Andean Community, published in OGCA No. 803 of June 10, 2002.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace803.pdf>

Decision 735 of the Commission of the Andean Community, published in OGCA No. 1841 of June 8, 2010.

importation of animals by species.⁴²

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1841.pdf>

Decision 793 of the Commission of the Andean Community, published in OGCA No. 2280 of December 16, 2013.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2280.pdf>

Decision 754 of the Commission of the Andean Community, published in OGCA No. 1948 of May 31, 2011.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1948.pdf>

Decision 814 of the General Secretariat of the Andean Community, published in OGCA No. 2841 of November 4, 2016.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2841.pdf>

Resolution 1851 of the General Secretariat of the Andean Community, published in OGCA No. 2739 of May 20, 2016.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2739.pdf>

Resolution 1970 of the General Secretariat of the Andean Community, published in OGCA No. 3159 of December 12, 2017.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3159.pdf>

⁴²

See, for example:

Resolution 1160 of the General Secretariat of the Andean Community, published in OGCA No. 1615 of May 5, 2008.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1615.pdf>

Resolution 1430 of the General Secretariat of the Andean Community, published in OGCA No. 1970 of August 19, 2011.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1970.pdf>

Resolution 1586 of the General Secretariat of the Andean Community, published in OGCA No. 2201 of May 24, 2013.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2201.pdf>

Resolution 1588 of the General Secretariat of the Andean Community,

In this context, the Tribunal has clarified that these laws serve not only the purpose of agricultural competitiveness, but also environmental protection. For example, in the Case 90-IP-2008 (*Ubicación de mataderos*),⁴³ the Tribunal provided guidance on the interpretation of *Decisión 197* (1984), which regulated the location of slaughterhouses. The judges explained that, in addition to promoting the beef agribusiness in the region, the purpose of *Decisión 197* is also the protection of “superior goods such as the health and life of people, as well as the protection of the right to a healthy environment”.⁴⁴ They specifically stated that “[e]ntrepreneurial freedom must develop within the framework of human rights and fundamental rights and, therefore, it is not an absolute right that has no limits”.⁴⁵ Subsequently, the Tribunal established some more specific guidelines on where slaughterhouses may or must not be located in order to avoid effects detrimental to

published in OGCA No. 2204 of May 28, 2013.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2204.pdf>

Resolution 1791 of the General Secretariat of the Andean Community, published in OGCA No. 2535 of July 14, 2015.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2535.pdf>

Decision 737 of the Commission of the Andean Community, published in OGCA No. 1841 of June 8, 2010.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1841.pdf>

Decision 808 of the Commission of the Andean Community, published in OGCA No. 2710 of April 13, 2016.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2710.pdf>

⁴³ Prejudicial Interpretation dated August 22, 2008 (Case 90-IP-2008), published in OGCA No. 1662 of October 9, 2008.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1662.pdf>

⁴⁴ *Ibidem*, paragraph B.

⁴⁵ *Ibidem*.

human health and the environment.⁴⁶ In this context, it expanded the scope of *Decisión 197*, which only mentioned populated centers, to other areas.⁴⁷

In the Case 133-IP-2012 (*reglamento técnico para la miel*), the Tribunal was called to interpret *Decisión 376* (2006) authorizing the member states to adopt technical regulations for the protection of human health and the environment. In the domestic procedure, a technical regulation issued by the Colombian government specifying the sanitary requirements of honey had been challenged for allegedly affecting jobs, competition, and economic freedom.⁴⁸ The Andean Tribunal confirmed the right of member states to adopt, maintain and apply technical regulations to protect human, animal and plant life and health, the environment, and the consumer.⁴⁹ Most notably, it confirmed that “[i]f these rights are confronted with each other, that is, the right to competitive agricultural development with the rights to life, health and access to a healthy environment, it is clear to the Tribunal that the former must yield to the latter”.⁵⁰

One of the most important examples of “environmental” jurisprudence of the Andean Tribunal – also for the purpose of this article – is the *Pesticides Saga*. This series of cases related to the implementation of Andean regulations that required the member states to register and control chemical pesticides for agricultural use.⁵¹ More specifically, the cases concerned the national legislation

⁴⁶ *Ibidem*, paragraph B and Concludes Two.

⁴⁷ Marcelo Vargas Mendoza, *El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Defensa de los Derechos Humanos*, in: Claudia Escobar García (ed.), *Teoría y práctica de la justicia constitucional*, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Quito, Quito, 2010, pp. 491-492.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 11.

⁴⁹ *Ibidem*, pp. 9 and 13.

⁵⁰ *Ibidem*, p. 11, citing the Judgment of January 27, 2009 (Case 05-AI-2008), p. 21.

⁵¹ Decision 436 of the Commission of the Andean Community, published in OGCA No. 347 of June 17, 1998.

of some member states that undermined the requirements of the Andean legislation.

In two preliminary references from Colombia,⁵² the Tribunal acknowledged the dangers posed by the uncontrolled use of

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace347.pdf>

Resolution 630 of the General Secretariat of the Andean Community, published in OGCA No. 810 of June 26, 2002.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace810.pdf>

Prejudicial Interpretation dated April 29, 2010 (Case 114-IP-2009), published in OGCA No. 1860 of August 4, 2010.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1860.pdf>

Prejudicial Interpretation dated February 25, 2010 (Case 115-IP-2009), published in OGCA No. 1828 of April 30, 2010.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1828.pdf>

Judgment dated January 27, 2009 (Case 05-AI-2008), published in OGCA No. 1824 of March 18, 2002.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1824.pdf>

Judgment dated June 22, 2011 (Case 02-AI-2010), published in OGCA No. 1973 of August 26, 2011.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1973.pdf>

Judgment dated July 19, 2012 (Case 01-AI-2011), published in OGCA No. 2086 of August 27, 2012.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2086.pdf>

Judgment dated July 16, 2013 (Case 01-AI-2012), published in OGCA No. 2265 of December 03, 2013.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2265.pdf>

⁵² Prejudicial Interpretations dated April 29, 2010 (Case 114-IP-2009) and February 25, 2010 (Case 115-IP-2009).

pesticides for humans, animals and plants, and the ecosystem in general.⁵³ It even made reference to several international law instruments emphasizing the need to better regulate toxic chemical products and repeatedly emphasized that the objective of *Decisión 436* (1998) is the protection of life, health, and the environment.⁵⁴ The Tribunal affirmed the supremacy of Andean community law over domestic legislation, and reiterated that according to the *complemento indispensable* doctrine, national law on a matter regulated by Andean law must not establish additional, parallel or conflicting requirements.⁵⁵

Following the Colombian cases, the Andean Tribunal became what *Alter, Helfer* and *Madsen* call “increasingly forceful in challenging the failure to follow the legislation in full”⁵⁶ in four infringement cases against Peru. It found that Peru had violated the Andean pesticides legislation by introducing exemptions to the regime, putting in grave danger the life, health and the balance of the ecosystem, and it ordered Peru to correctly implement the Andean normative.⁵⁷ Each time, Peru responded with halfhearted measures, attempting to circumvent Andean pesticide rules through the introduction of new exceptions and loopholes.⁵⁸ In one of the cases, it can be assumed that the Andean judges were somewhat concerned when they added that “the Tribunal reminds the member state that up to three processes with related events have already been processed and, therefore, reiterates its obligation to proceed in accordance with the fundamental principles of subregional

⁵³ See pp. 16-17 and 23 of the Prejudicial Interpretation dated April 29, 2010 (Case 114-IP-2009).

⁵⁴ *Ibidem*, pp. 13-14, 16, 20-21.

⁵⁵ *Ibidem*, pp. 12-13, 37.

⁵⁶ Karen Alter, Laurence Helfer, Mikael Rask Madsen, *International Court Authority*, Oxford University Press, Oxford, 2018, pp. 185-186.

⁵⁷ See pp. 23-25 of the Judgment dated January 27, 2009 (Case 05-AI-2008).

⁵⁸ Karen Alter, Laurence Helfer, Mikael Rask Madsen, *International Court Authority*, Oxford University Press, Oxford, 2018, pp. 185-186.

integration and true cooperation between its states”.⁵⁹

Eventually, the member states approved *Decisión 804* (2015), which completely modified *Decisión 436* (1998) and gave member states greater leeway, and *Resolución 630* (2002) was replaced by *Resolución 2075* (2019). Some commentators have referred to this as the member states scaling back Andean regulation in favor of rules that were less strict, *de facto* changing the rules of a game after they lost,⁶⁰ while others believe that the rules were too strict for the states to realistically adhere to, which is why they needed to be updated.⁶¹ Nonetheless, the *Pesticide* cases are highly interesting because the Andean Tribunal does not limit its activities to “greening” Andean trade and agricultural law or to introduce environmental considerations in these areas of law, but it directly contributes to the enforcement of environmental standards in the member states.

3.4. Intellectual property law

In addition, several normative acts that are relevant for environment have been adopted in the area of intellectual property protection. For example, *Decisión 486* (2000) has an important environmental dimension as it excludes from patent protection living beings or their parts as found in nature, natural biological processes, the genome or germplasm of a living being, and any invention that may endanger the preservation of plants, animals and the environment.⁶² It also includes a special provision to protect the genetic resources and

⁵⁹ See p. 22 of the Judgment dated July 19, 2012 (Case 01-AI-2011).

⁶⁰ Karen Alter, Laurence Helfer, Mikael Rask Madsen, *International Court Authority*, Oxford University Press, Oxford, 2018, pp. 185-186. Also, author’s interview with an anonymous TJCA Magistrate (Quito, June 6, 2022).

⁶¹ Author’s interview with an anonymous official from Directorate I of the General Secretariat of the Andean Community (Quito and Bogotá, May 20, 2022).

⁶² See articles 14-21 of Decision 486 of the Commission of the Andean Community, published in OGCA No. 600 of September 19, 2000. Available at: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetitas/gace600.pdf>

creations of indigenous and afro descendent communities.⁶³ *Decisión 345* (1993) serves to safeguard the rights of breeders of new plant varieties, which are usually traditional farmers and indigenous communities, and *Decisión 391* (1996) aims to regulate access to genetic resources and protecting the biological patrimony of indigenous and local rural communities as well as biodiversity.

In this context, the Andean Tribunal has provided guidance on how conflicts between the protection of intellectual property rights and the protection of the environment should be addressed. It explained in the Case 01-AI-1996 (*Pipeline patents*) (concerning *Decisión 344* (1993), replaced by *Decisión 486* (2000)) that patents cannot be granted to inventions that are contrary to public order, human or animal health and life, and the preservation of flora and the environment.⁶⁴ In the Case 45-IP-2008 (*GANAVET*), the Tribunal clarified that a trademark can also not be registered if it bears the risk of confusion with another name, and the confusion is susceptible to cause a risk to the health of living beings such as humans, animals or plants.⁶⁵

In the Case 60-IP-2012 (*Coca indígena*), the Tribunal stepped up for the protection of the rights of indigenous communities to their

⁶³ *Ibidem*, Art. 3.

⁶⁴ See p. 26 of the Judgment dated October 30, 1996 (Case 1-AI-96), published in OGCA No. 234 of November 21, 1996.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace234.pdf>

⁶⁵ See p. 31 of the Prejudicial Interpretation dated May 14, 2008 (Case 045-IP-2008), published in OGCA No. 1641 of July 31, 2008. In this case, two similar trademarks were considered - Ganavet (a veterinary anti-parasitic) and Ganavit (vitamins).

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1641.pdf>

See also, Prejudicial Interpretation dated June 06, 2012 (Case 19-IP-2012), published in OGCA No. 2097 of September 26, 2012. This case about a similar logo for a perfume and an herbicide.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2097.pdf>

biological patrimony. The case revolves around the standards of consultation of an indigenous community before their traditional knowledge is used commercially. Interpreting *Decision 486*, the Tribunal explained that respective procedures must take into account Inter-American human rights law.⁶⁶ Interestingly, in addition to protecting the rights of indigenous peoples, the Tribunal determined that *Decisión 486* also protects the consumer from being misled, as a trademark must not be registered if it consists of deceptive signs that may deceive the consumer about the origin, nature, manufacturing method, or qualities of the product.⁶⁷ With some degree of creativity, this last statement could become relevant in cases of “greenwashing” (*ecoblanqueo*), in which a commercial product is misleadingly named and marketed as being eco-friendly with the goal to increase its profitability.

The connection between intellectual property and environmental protection is much less obvious than with other areas of law. However, there is a potential for a multitude of cases on the topic. Strict intellectual property protection can provide the incentive for research and innovation in many fields, stretching from technologies for climate change mitigation and adaptation to the development of pesticide formulae – but it may also provide certain companies (especially those from developed countries) with a monopoly position and hinder fair competition.⁶⁸ Moreover, intellectual property rules become relevant in matters of patenting sentient beings, either for artistic and aesthetic goals (“bioart”) or the genetic modification of animals or plants for scientific research.⁶⁹ With its

⁶⁶ See p. 32 of the Prejudicial Interpretation dated October 24, 2012 (Case 60-IP-2012), published in OGCA No. 2157 of February 27, 2013.
Available at:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetitas/Gace2157.pdf>

⁶⁷ *Ibidem*.

⁶⁸ Ariadna Figueroa Hernández and Yendry Hernández Benítez, *Intellectual Property Rights and the Environment: The Climate Change Negotiations*, in: *Revista la Propiedad Inmaterial*, 28, 2019, pp. 43, 47-49, 53.

⁶⁹ Prejudicial Interpretation dated October 27, 2000 (Case 21-IP-2000), published in OGCA No. 631 of January 10, 2001.

expertise in intellectual property matters, the Tribunal can be expected to render some wise decisions on these matters in the future.

3.5. Illegal mining

Not considered environmental law in the strict sense, the fight against illegal mining was not paralyzed in the course of the “*Reingeniería*” of 2013. Therefore, the Andean Community has issued several *Decisiones* in its fight against illegal mining in the region, *Decisiones 774* (2012) and *844* (2019). Whereas *Decisión 774* aims at taking coordinated action against illegal mining, *Decisión 844* establishes the Andean Observatory responsible for information management on mercury. The Observatory’s work rules were adopted last year, and it is about to become operative.⁷⁰

In two prejudicial interpretations, the Tribunal clarified the application of *Decisión 774* to illegal and informal miners. Both operate without official authorization or other formalized ties with the government, but illegal mining is carried out in zones of environmental protection or relies on heavy machinery, whereas informal mining is carried out by small-scale traditional and artisanal miners.⁷¹ In the Case 575-IP-2015 (*Minería Ilegal I*), the Tribunal explained that it was recommendable for states to introduce different regimes for the legalization of illegal and informal miners. However, it explained that the objective of the Andean normative is “to protect the environment, the health of the population and natural

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE631.PDF>

⁷⁰ Resolution 2197 of the General Secretariat of the Andean Community, published in OGCA No. 4229 of April 30, 2021.

Available at:

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta_4229.pdf

⁷¹ See Ministry of Environment of Peru, *Diálogos Ambientales con la Prensa - Minería Ilegal*, 2013.

Available at:

<https://www.minam.gob.pe/prensa/dialogos-ambientales/dialogos-ambientales-mineria-ilegal-y-mineria-informal/> (Accessed: June 08, 2022).

resources”⁷², and not small-scale informal miners. Therefore, the differentiation made between the concepts of “small-scale, artisan or traditional mining” and “illegal mining” does not imply that people who carry out the first are excluded from the obligation to comply with permits, demands, and legal requirements. If they fail to do so, they could incur in illegal mining⁷³.

The Tribunal confirmed in the Case 669-IP-2015 (*Minería Ilegal II*) (surrounding a Colombian *decreto* authorizing the police to immediately destroy heavy machinery used in mining activities without mining authorization or environmental license) that the purpose of *Decisión 774* is to combat and eradicate illegal mining by generating “more effective tools to combat and eradicate illegal mining in each of the member countries and thus avoid damage to the environment, ecosystems, biodiversity, natural resources and life and health of the population”.⁷⁴ It therefore acknowledged that member states have great leeway in the development of procedural rules for the destruction of machinery used in illegal mining⁷⁵.

Both these decisions make clear that while informal miners can expect a differentiated treatment in the proceedings surrounding their formalization and legalization, they cannot expect any preferential treatment from law enforcement when they continue operating outside the law. Generally, it is worth quoting the Tribunal’s words on illegal mining:

“A scourge that plagues the four countries of the Andean

⁷² See paragraphs 2.5-2.6 of the Prejudicial Interpretation dated February 17, 2017 (Case 575-IP-2015), published in OGCA No. 2968 of March 15, 2017. Available at: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetatas/GACE2968.pdf>

⁷³ *Ibidem*, paragraph 3.3.

⁷⁴ See paragraphs B.3.5-3.6 of the Prejudicial Interpretation dated February 17, 2017 (Case 669-IP-2015), published in OGCA No. 2969 of March 16, 2017. Available at: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetatas/GACE2969.pdf>

⁷⁵ *Ibidem*, paragraphs B.3.7-B.3.9.

Community is illegal mining. Mining that takes place without permits, without authorizations, without environmental impact studies; mining that takes place in prohibited areas, such as rivers, buffer zones, protected natural areas; mining that uses mercury in rivers, a substance that sterilizes the land, poisons the fish and makes people sick; mining that has been destroying the forests of the Amazon...]”.⁷⁶

4. Environmental Protection in the Andean Framework

4.1. Potential of regional organizations

The supranational structure of the Andean Community has great potential to improve environmental protection in the member states and add an additional layer of protection to the system. Andean environmental law is immediately applicable, meaning that there is no need for the member states to ratify it for it to have legal effects, and it comes with a specialized Tribunal to ensure its enforcement. The Andean Tribunal is considerably faster than many other international courts⁷⁷ and it can authorize member states to take retaliatory trade measures against member states that do not comply with its decisions.⁷⁸ Indeed, there appear to be no widespread complaints about compliance with its decisions.⁷⁹

Its potential becomes even more clear when compared to the European Union and its Court of Justice. Even though the European Court operates in a very different political, social, and economic

⁷⁶ See paragraph 2.1 of the Prejudicial Interpretation dated February 17, 2017 (Case 575-IP-2015).

⁷⁷ For instance, a case before the Inter-American Commission and Court of Human Rights can take almost two decades to run its course.

⁷⁸ See art. 27 of the Treaty of Creation of the Court of Justice of the Andean Community.

⁷⁹ Miguel Antonio Villamizar, *The Andean Court de Justice*, en: Robert Howse, Hélène Ruiz-Fabri, Geir Ulfstein, Michelle Zang (eds.), *The legitimacy de international trade courts and tribunals*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, p. 282.

context, it serves to illustrate the possibilities offered by regional courts of economic and political integration in environmental matters. The European Court and the Andean Tribunal are “sibling” courts, meaning they are based on the same model and share common features in their functioning.

The European Court is the principal judicial authority monitoring the uniform application and interpretation of the law of the European Union, which is a regional organization comprising 27 member states. Although the focus of European law was initially on economic integration, it has expanded and now covers a variety of matters, including environmental protection and sustainable development. European environmental law tends to be highly technical and specific, which many agree is the reason for its efficiency.⁸⁰ Accordingly, with more than 1,300 judgments relating to environmental matters by the end of 2020,⁸¹ the Court’s contribution to the development, clarification and enforcement of European environmental law is unprecedented.

In 2020, more than 20% of infringement proceedings against member states were related to the environment.⁸² It is important to

⁸⁰ Werner Scholtz and Jonathan Verschuuren, *Regional Environmental Law - Transregional Comparative Lessons in Pursuit de Sustainable Development*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2015, pp. 12-13. See also, Jonathan Verschuuren, *Contribution de the case law de the European Court de Human Rights to sustainable development in Europe*, in: Werner Scholtz y Jonathan Verschuuren (eds.), *Regional Environmental Law - Transregional Comparative Lessons in Pursuit de Sustainable Development*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2015, p. 385.

⁸¹ With over 700 judgments documented up to 2006 (see, Francis Jacobs, *The Role de the European Court de Justice in the Protection de the Environment*, in: *Journal de Environmental Law*, 18 (2), 2006, p. 185), and 675 sanctions procedures following infringement judgments concerning the environment alone between 2007 and 2020 (see, Directorate-General for the Environment, *Legal Enforcement Statistics on Environmental Infringements – Article 260 (previously 228) Cases*, 2021. Available at: <https://ec.europa.eu/environment/legal/law/statistics.htm> [Accessed: March 25, 2022]).

⁸² Daniele de Bernardin, *EU infringement proceedings: July 2020 update*, in: *European Data Journalism Network*, July 22, 2020.

note that the European Court does not permit infringement proceedings to be brought by private entities – this right lies only with other member states and the European Commission.⁸³ However, the European Commission has relentlessly been dragging member states to the Court due to their failure to adhere to European environmental regulations. For example, the Court has sentenced Bulgaria for breaching EU Sulphur dioxide threshold levels in ambient air contained in the Directive 2008/50/EC,⁸⁴ Germany for failing to remedy excessively high levels of nitrate in its groundwater,⁸⁵ and Poland for prolonging the operation of a coal plant with serious environmental consequences (this last case is exceptional as it was filed by another member state).⁸⁶ Some

Available at:

<https://www.europeandatajournalism.eu/eng/News/Data-news/EU-infringement-procedures-July-2020-update> (Accessed: March 25, 2022).

⁸³ See arts. 258-259 of the Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union (adopted March 25, 1957, entry into force January 1, 1958), published in the Official Journal of the European Union C 326 dated October 26, 2012.

Available at:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT>

⁸⁴ Judgment dated April 5, 2017 of the Court of Justice of the European Union (Third Chamber) (Case C-488/15, European Commission v. Republic of Bulgaria).

Available at:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62015CJ0488>

⁸⁵ Judgment dated June 21, 2018 of the Court of Justice of the European Union (Ninth Chamber) (Case C-543/16, European Commission v. Federal Republic of Germany).

Available at:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.285.01.0006.01.SPA

⁸⁶ Order dated May 21, 2021 of the Vice-President of the Court of Justice of the European Union (Injunctive Relief Order) (Case C-121/21 R, Czech Republic v. Republic of Poland).

Available at:

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:62021CO0121\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:62021CO0121(01))

decisions are of such a high level of specificity that they may even appear ridiculous to some: For instance, France was sentenced in 2011 for failing to take adequate measures to protect the European Hamster in Alsace.⁸⁷

4.2. Obstacles and proposals to environmental protection in the Andean Community

As demonstrated above, the Andean Tribunal has shown a careful tendency to “green” Andean community law in the areas of trade, agriculture, and intellectual property. However, the type of enforcement comparable to the European Union cannot yet be seen in the Andean Community.

The first and most important reason for this is the lack of environmental legislation in the Andean Community. As shown above, Andean environmental law is generally considerably weaker than other areas of law regulated by the Community. Due to the “*Reingeniería*”, the development of environmental law been on a standstill for a decade, and the regulation of environmental matters through other areas of law has resulted in a fragmented patchwork rug of disconnected *Decisiones* without an integrated strategy. The result of this sectoral approach is an environmental regime that regulates in detail the prevention and control of acute *hepatopancreatic necrosis* in shrimp,⁸⁸ but has almost no legislation at all on the protection of biodiversity, the improvement of air and soil quality, or climate change adaptation and mitigation. Moreover, unlike Andean intellectual property rules, which are detailed and precise, *Decisiones* in environmental matters often contain loopholes

⁸⁷ Judgment dated June 9, 2011 of the Court of Justice of the European Union (Fourth Chamber) (Case C-383/09, European Commission v. French Republic).

Available at:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:62009CJ0383>

⁸⁸ Resolution 1851 of the General Secretariat of the Andean Community, published in OGCA No. 2739 of May 20, 2016.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetitas/GACE2739.pdf>

and wordings that preserve national discretion.⁸⁹

As there are not environmental rules that can be violated by the member states, the General Secretariat cannot initiate infringement proceedings against them even if it wanted to. Without environmental legislation and parties willing to make use of the Tribunal's services to enforce its implementation, the Andean Tribunal remains focused on other matters that have been developed more in detail, such as issues of intellectual property, commerce, customs, taxes, and free competition.

Therefore, the next step would be to develop *Decisiones* with specific state obligations on environmental matters. The Andean Environmental Charter could provide an important starting point. For example, one goal agreed upon in the Charter is the comprehensive management of water resources. Agricultural, urban, and industrial discharges have resulted in the serious deterioration of water quality in many Andean states.⁹⁰ A sensible next step could entail the improvement of water quality through the fixation of pollution thresholds and procedures for agricultural discharges. Another topic mentioned in the Andean Environmental Charter is the promotion of a circular economy and the reduction of waste. In this context, just as a matter of example, the Community could introduce standards and restrictions for the use of plastic bags. The European Union has already adopted a Directive dealing with the unsustainable use of plastic bags,⁹¹ and the East African Community

⁸⁹ Karen Alter and Laurence Helfer, *Transplanting International Courts: The Law and Politics of the Andean Tribunal de Justicia*, Oxford University Press, Oxford, 2017, p. 139. See, for example, Arts. 15 and 20 of Decision 328 of the Commission of the Cartagena Agreement.

⁹⁰ See for example, in the case of Colombia (Flaminio Rueda Camberos, Walter Arboleda Girón, Norton Gutiérrez Pérez, *La calidad del agua de los acueductos de los acueductos de las áreas urbanas del departamento del Meta*, in: *Investigaciones Andina*, 19 [35], 2017, pp. 11-30).

⁹¹ Directive (EU) 2015/720 of the European Parliament and of the Council (Amending Directive 94/62/EC as regards the reduction of the consumption of lightweight plastic carrier bags) (adopted 29 April 2015), published in the Official Journal of the European Union L 115 dated 6 May 2015.
Available at:

is contemplating a full regional ban on polythene materials after already having passed a series of restrictions upon these materials in 2017.⁹²

In addition to establishing new environmental rules, it is important to tackle the other two obstacles in the Andean System. Firstly, there appears to be a considerable lack of awareness and understanding of community law and how it works in civil society and the NGO sector. Community law, still associated with matters of trade, customs, and intellectual property by large parts of the legal community in the Andes, and the functioning of the Andean Tribunal, is not easy to understand for environmental lawyers (who often have a background in human rights or constitutional law). It is thus important to further engage civil participation in the Andean Community. In this context, the establishment of the Andean Committee of Government Authorities on the Rights of Indigenous Peoples in 2022⁹³ to replace the inactive Consultative Council of Indigenous Peoples created in 2007 is a first step in the right direction. Further initiatives include the publication of brochures that make Andean law more accessible to citizens and indicate means for public participation in environmental decision-making.

Secondly, it must be recognized that the Tribunal has developed rather rigid rules concerning the legal standing of private parties. According to the Tribunal's own jurisprudence, private parties can only initiate infringement proceedings if they are affected in their

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32015L0720>

⁹² Jonathan Cocker and Nkiruka Maduekwe, *Is the East African Community a model plastic pollution strategy*, in: *Environmental Law Insights*, August 17, 2020.
Available at:
<https://www.environmentlawinsights.com/2020/08/17/is-the-east-african-community-a-model-for-plastics-pollution-strategy/> (Accessed: March 25, 2022).

⁹³ Karina Sotalín, *Cancilleres de la CAN acuerdan crear Comité enfocado en pueblos indígenas*, in: *El Comercio*, March 26, 2022.
Available at:
<https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/cancilleres-can-comite-pueblos-indigenas-paises.html> (Accessed: June 8, 2022)

subjective rights or legitimate interests.⁹⁴ This affectation of a subjective right, however, must be “present, immediate, and direct”.⁹⁵ Similarly, the legitimate interest must be sufficiently attributable to the complainant.⁹⁶ The fact that the Tribunal may not admit infringement actions in which the complainant only contends the violation of a “diffuse interest” (*interés difuso*) may limit the current options of environmental litigation before the Tribunal.⁹⁷

However, this is not necessarily the Tribunal’s final interpretation. It must be taken into account that the jurisprudence of the Tribunal is in constant evolution and, in the future, the Tribunal may issue interesting interpretations when the case concerns the environment. Indeed, as the jurisprudence of the Tribunal on legal standing has oscillated in the past,⁹⁸ it is not unthinkable that it may introduce special criteria for environmental cases if confronted with one. In addition, it is worth recalling that the Tribunal has applied the principle of material justice (*justicia material*) in annulment

⁹⁴ See paragraph 1.7 of the Judgment dated July 07, 2017 (Case 01-AI-2015), published in OGCA No. 3100 of September 25, 2017.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetatas/GACE3100.pdf>

⁹⁵ *Ibidem.*

⁹⁶ *Ibidem.*

⁹⁷ See paragraph 3.1.16 of the Judgment dated October 3, 2017 (Case 03-AI-2017), published in OGCA No. 3143 of November 24, 2017.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetatas/GACE3143.pdf>

See also the very restrictive interpretation in the Judicial Order dated May 19, 2016 within Case 01-RO-2015 (through which the Appeal for Omission filed by the Colombian Association of the Industry of Fats and Edible Oils ASOGRASAS against the Commission of the Andean Community was rejected).

⁹⁸ Compare the aforementioned jurisprudence with the jurisprudence in the Judgment dated February 1, 2002 (Case 14-AN-2001), published in OGCA No. 773 of March 18, 2002.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetatas/GACE773.PDF>

proceedings.⁹⁹ If this principle, widely applied in environmental law, were to be applied to an infringement proceeding in environmental matters, we could predict a future jurisprudence that reinforces environmental protection.

As a consequence, environmental litigation will largely depend of the future environmental obligations for states incorporated in new Andean *Decisiones*, the willingness of the General Secretariat to submit cases against member states, and the future jurisprudence of the Tribunal, which can adapt its current legal criteria to the protection of the environment (such as legal standing where a “diffuse interest” is affected). It would also be an option to campaign for legal standing to be granted to the Andean Parliament to act as a “watchdog” alongside the General Secretariat.

5. Conclusion

The Andean Community presents a peculiar situation: It provides for powerful supranational structures which, from an environmental perspective, are lying idle. Similarly, although the Andean Tribunal has explicitly recognized environmental protection as an objective in the Andean Community, without the development of regional community law, it will be left to “oversee an empty construction site”.¹⁰⁰

However, as the Andean member states are showing initiatives to take up the development of Andean environmental law, NGOs and environmental defenders are presented with a unique opportunity to further push the environmental agenda of the Community. The Andean Environmental Charter (2020) represents a good starting point, but it is crucial to develop specific *Decisiones* on

⁹⁹ See paragraphs 3.2.7.-3.3.1.3 of the Order dated June 27, 2022 (Case 03-AN-2021), published in OGCA No. 4493 of June 27, 2022.
Available at:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetitas/Gaceta 4493.pdf>

¹⁰⁰ Karen Alter and Liesbet Hooghe, *Regional Dispute Settlement*, in: Tanja Börzel, Thomas Risse (eds.), *The Oxford Handbook de Comparative Regionalism*, Oxford University Press, Oxford, 2016, p. 547.

environmental matters, such as common and precise standards for air and water quality, industrial emissions, or the protection of shared ecosystems. The European experience shows that regional community law and jurisprudence has great potential to advance environmental protection. The Andean Community has a similar capacity to issue enforceable and highly specific normative acts, and its acquaintance with technical administrative regulations may provide it with an advantage over institutions dealing with vague human or constitutional rights. Most importantly, these standards would also be enforceable before the Court of Justice of the Andean Community.

In order to not lose this impetus, NGOs, environmentalists and academics would do well to become more involved in the Andean Community. It is important to understand that this is a mechanism that enables private actors to sue a member state if it is not complying with community environmental law. Moreover, while civil society may be ignoring Andean law, commercial actors most certainly do not.¹⁰¹ Additionally, it is to be hoped that domestic courts and administrative agencies become encouraged to submit preliminary references on environmental matters to the Tribunal to contribute to the development of a strong legal framework. Generally, if the environmental topic is taken up in the Andean Community, this would add an additional level of protection and complementary means for the enforcement of environmental law.

The principles that govern Andean law (supremacy, immediate applicability, direct effect), the supranational character of the Andean Tribunal and the mandatory nature of its rulings open up an interesting opportunity to reinforce environmental protection in the Andean Community in the future. Therefore, it is necessary that the commitments assumed by the member states in the Andean Charter become effective, binding and concrete through the emission of *Decisiones* by the Commission. Any measure aimed at

¹⁰¹ For example, the regulations on pesticide control mentioned above were most likely relaxed as a consequence of the lobbying activities of peasant associations (see Karen Alter, Laurence Helfer, Mikael Rask Madsen, *International Court Authority*, Oxford University Press, Oxford, 2018, p. 186).

environmental protection that is incorporated into a *Decisión* becomes a legal obligation for the member states, so an infringement may be challenged before the Andean Tribunal, the guardian of Andean community law.

If citizens, academics, and environmental NGOs feel today that their claims are not being addressed by national bodies and authorities, the alternative is to resort to supranational Andean community law, which contains tools that allow countries to be forced to comply with the commitments assumed. The idea, therefore, is that certain measures for environmental protection be transferred from national legislation to the Andean legal system, so that, if these measures are not complied with, the interested parties can sue the member states and demand compliance with these measures, all of which will strengthen environmental protection for the benefit of present and future generations.

6. References

Legislation

- Andean Environmental Charter adopted by the Andean Council of Ministers of Foreign Affairs, dated 01 December 2020.
Available at:
<https://www.comunidadandina.org/notas-de-prensa/carta-ambiental-andina/> (Accessed: June 08, 2022)
- Andean Subregional Integration Agreement (Cartagena Agreement), to date, codified by Decision 563 of the Commission of the Andean Community, published in OGCA No. 940 dated July 1, 2003.
Available at:
https://www.tribunalandino.org.ec/wp-content/uploads/2019/06/Acuerdo_Cartagena.pdf
- Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union (adopted March 25, 1957, entry

into force January 01, 1958), published in the Official Journal of the European Union C 326 dated October 26, 2012.

Available at:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT>

- Decision 182 of the Commission of the Cartagena Agreement, published in OGCA No. 2 of September 7, 1983.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/decisiones/DEC182.doc>

- Decision 197 of the Commission of the Cartagena Agreement, published in OGCA No. 5 of March 6, 1984.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/decisiones/DEC197.doc>

- Decision 328 of the Commission of the Cartagena Agreement, published in OGCA No. 118 of October 30, 1992.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace118.pdf>

- Decision 344 of the Commission of the Cartagena Agreement, published in OGCA No. 142 of October 29, 1993.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace142.pdf>

- Decision 345 of the Commission of the Cartagena Agreement, published in OGCA No. 142 of October 29, 1993.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/>

[Gacetas/gace142.pdf](#)

- Decision 376 of the Commission of the Cartagena Agreement, published in OGCA No. 178 of April 21, 1995.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace178.pdf>

- Decision 391 of the Commission of the Cartagena Agreement, published in OGCA No. 213 of July 17, 1996.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace213.pdf>

- Decision 425 of the Andean Council of Ministers of Foreign Affairs, at an enlarged meeting, with the representatives to the Commission, published in OGCA No. 314 of December 18, 1997.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace314.pdf>

- Decision 435 of the Andean Community Commission, published in OGCA No. 347 of June 17, 1998.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace347.pdf>

- Decision 436 of the Commission of the Andean Community, published in OGCA No. 347 of June 17, 1998.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace347.pdf>

- Decision 486 of the Commission of the Andean Community, published in OGCA No. 600 of September

19, 2000.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace600.pdf>

- Decision 500 of the Andean Council of Ministers of Foreign Affairs, published in OGCA No. 680 of June 28, 2001.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GAC E680.PDF>

- Decision 515 of the Commission of the Andean Community, published in OGCA No. 771 of March 14, 2002.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GAC E771.PDF>

- Decision 519 of the Commission of the Andean Community, published in OGCA No. 803 of June 10, 2002.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace803.pdf>

- Decision 523 of the Andean Council of Ministers of Foreign Affairs, published in OGCA No. 813 of July 9, 2002.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace 813.pdf>

- Decision 529 of the Andean Council of Foreign Ministers, published in OGCA No. 814 of July 9, 2002.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace814.pdf>

- Decision 596 of the Andean Council of Ministers of Foreign Affairs in an expanded meeting with the Commission, published in OGCA No. 1092 of July 16, 2004.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1092.pdf>

- Decision 699 of the Commission of the Andean Community, published in OGCA No. 1679 of December 10, 2008.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1679.pdf>

- Decision 713 of the Andean Council of Foreign Ministers, published in OGCA No. 1742 of August 21, 2009.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1742.pdf>

- Decision 735 of the Andean Community Commission, published in OGCA No. 1841 of June 08, 2010.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1841.pdf>

- Decision 737 of the Commission of the Andean Community, published in OGCA No. 1841 of June 8, 2010.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1841.pdf>

- Decision 754 of the Commission of the Andean Community, published in OGCA No. 1948 of May 31, 2011.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1948.pdf>

- Decision 762 of the Andean Council of Foreign Ministers, published in OGCA No. 1972 of August 23, 2011.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1972.pdf>

- Decision 763 of the Andean Council of Foreign Ministers, published in OGCA No. 1972 of August 23, 2011.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1972.pdf>

- Decision 774 of the Andean Council of Foreign Ministers, meeting in expanded form with the incumbent representatives to the Andean Community Commission, published in OGCA No. 2103 of October 10, 2012.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2103.pdf>

- Decision 792 of the Andean Council of Ministers of Foreign Affairs, meeting in an expanded form with the incumbent representatives to the Andean Community Commission, published in OGCA No. 2238 of September 23, 2013.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2238.pdf>

- Decision 793 of the Andean Community Commission, published in OGCA No. 2280 of December 16, 2013.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2280.pdf>

- Decision 797 of the Andean Council of Ministers of Foreign Affairs, at an expanded meeting with the incumbent representatives to the Commission, published in OGCA No. 2400 of October 15, 2014.
Available at:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2400.pdf>
- Decision 804 of the Andean Community Commission, published in OGCA No. 2493 of April 28, 2015.
Available at:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2493.pdf>
- Decision 808 of the Commission of the Andean Community, published in OGCA No. 2710 of April 13, 2016.
Available at:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2710.pdf>
- Decision 814 of the General Secretariat of the Andean Community, published in OGCA No. 2841 of November 04, 2016.
Available at:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2841.pdf>
- Decision 884 of the Andean Council of Foreign Ministers, meeting in expanded form with the incumbent representatives to the Andean Community Commission, published in OGCA No. 3649 of May 29, 2019.
Available at:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA3649.pdf>
- Directive (EU) 2015/720 of the European Parliament and of the Council (Amending Directive 94/62/EC as regards the reduction of the consumption of lightweight

plastic carrier bags), adopted on April 29, 2015, published in the Official Journal of the European Union L 115 dated May 06, 2015.

Available at:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32015L0720>

- Resolution 630 of the General Secretariat of the Andean Community, published in OGCA No. 810 of June 26, 2002.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace810.pdf>

- Resolution 1160 of the General Secretariat of the Andean Community, published in OGCA No. 1615 of May 5, 2008.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1615.pdf>

- Resolution 1430 of the General Secretariat of the Andean Community, published in OGCA No. 1970 of August 19, 2011.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1970.pdf>

- Resolution 1586 of the General Secretariat of the Andean Community, published in OGCA No. 2201 of May 24, 2013.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2201.pdf>

- Resolution 1588 of the General Secretariat of the Andean Community, published in OGCA No. 2204 of May 28, 2013.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace 2204.pdf>

- Resolution 1791 of the General Secretariat of the Andean Community, published in OGCA No. 2535 dated July 14, 2015.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2535.pdf>

- Resolution 1851 of the General Secretariat of the Andean Community, published in OGCA No. 2739 of May 20, 2016.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2739.pdf>

- Resolution 1970 of the General Secretariat of the Andean Community, published in OGCA No. 3159 of December 12, 2017.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3159.pdf>

- Resolution 2075 of the General Secretariat of the Andean Community, published in OGCA No. 3709 of August 02, 2019.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta 3709.pdf>

- Resolution 2197 of the General Secretariat of the Andean Community, published in OGCA No. 4229 of April 30, 2021.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta 4229.pdf>

- Treaty of Creation of the Court of Justice of the Andean

Environmental Protection in the Andean Community

Community, codified by Decision 472 of the Commission of the Andean Community, published in OGCA No. 483 of September 17, 1999.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace483.pdf>

Cases

- Judgment dated December 3, 1987 (Case 1-IP-87), published in OGCA No. 28 of February 15, 1988.
Available at:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/1-IP-87.doc>
- Judgment dated October 30, 1996 (Case 1-AI-96), published in OGCA No. 234 of November 21, 1996.
Available at:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace234.pdf>
- Judgment dated March 24, 1997 (Case 3-AI-96), published in OGCA No. 261 of April 29, 1997.
Available at:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace261.pdf>
- Judgment dated December 11, 1997 (Case 1-AI-97), published in OGCA No. 329 of March 9, 1998.
Available at:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace329.pdf>
- Judgment dated February 26, 1998 (Case 1-AN-97), published in OGCA No. 340 of May 13, 1998.
Available at:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace340.pdf>

- Judgment dated June 08, 1998 (Case 5-AN-97), published in OGCA No. 361 of August 07, 1998.
Available at:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace361.pdf>
- Judgment dated November 12, 1999 (Case 07-AI-99), published in OGCA No. 520 of December 20, 1999.
Available at:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/gace520.pdf>
- Judgment dated February 1, 2002 (Case 14-AN-2001), published in OGCA No. 773 of March 18, 2002.
Available at:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE773.PDF>
- Judgment dated January 27, 2009 (Case 05-AI-2008), published in OGCA No. 1824 of March 18, 2002.
Available at:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1824.pdf>
- Judgment dated June 9, 2011 of the Court of Justice of the European Union (Fourth Chamber) (Case C-383/09, European Commission v. French Republic).
Available at:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:62009CJ0383>
- Judgment dated June 22, 2011 (Case 02-AI-2010), published in OGCA No. 1973 of August 26, 2011.
Available at:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1973.pdf>
- Judgment dated July 19, 2012 (Case 01-AI-2011), published in OGCA No. 2086 of August 27, 2012.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2086.pdf>

- Judgment dated July 16, 2013 (Case 01-AI-2012), published in OGCA No. 2265 of December 03, 2013.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2265.pdf>

- Judgment dated August 23, 2018 (Case 01-AN-2015), published in OGCA No. 3369 of September 13, 2018.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta 3369.pdf>

- Judgment dated August 26, 2016 (Case 02-AN-2015), published in OGCA No. 2810 of September 15, 2016.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2810.pdf>

- Judgment dated April 05, 2017 of the Court of Justice of the European Union (Third Chamber) (Case C-488/15, European Commission v. Republic of Bulgaria).

Available at:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62015CJ0488>

- Judgment dated 07 July 2017 (Case 01-AI-2015), published in OGCA No. 3100 of 25 September 2017.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3100.pdf>

- Judgment dated October 03, 2017 (Case 03-AI-2017), published in OGCA No. 3143 of November 24, 2017.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE3143.pdf>

- Judgment dated June 21, 2018 of the Court of Justice of the European Union (Ninth Chamber) (Case C-543/16, European Commission v. Federal Republic of Germany).

Available at:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.285.01.0006.01.SPA

- Judgment dated June 21, 2018 of the Court of Justice of the European Union (Ninth Chamber) (Case C-543/16, European Commission v. Federal Republic of Germany).

Available at:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.285.01.0006.01.SPA

- Order dated May 19, 2016 within Case 01-RO-2015 (through which the Appeal for Omission filed by the Colombian Association of the Industry of Fats and Edible Oils ASOGRASAS against the Commission of the Andean Community was rejected).

- Order dated May 21, 2021 of the Vice-President of the Court of Justice of the European Union (Precautionary Measures Order) (Case C-121/21 R, Czech Republic v. Republic of Poland).

Available at:

[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:62021CO0121\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:62021CO0121(01))

- Order dated June 27, 2022 (Case 03-AN-2021),

published in OGCA No. 4493 of June 27, 2022.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta 4493.pdf>

- Preliminary Ruling dated October 27, 2000 (Case 21-IP-2000), published in OGCA No. 631 of January 10, 2001.
Available at:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GAC E631.PDF>

- Preliminary Ruling dated February 2, 2005 (Case 157-IP-2004), published in OGCA No. 1175 of March 15, 2005.
Available at:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1175.pdf>

- Preliminary Ruling dated May 14, 2008 (Case 045-IP-2008), published in OGCA No. 1641 of July 31, 2008.
Available at:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1641.pdf>

- Preliminary Ruling dated August 22, 2008 (Case 90-IP-2008), published in OGCA No. 1662 of October 9, 2008.
Available at:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1662.pdf>

- Preliminary Ruling dated February 25, 2010 (Case 115-IP-2009), published in OGCA No. 1828 of April 30, 2010.
Available at:
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace 1828.pdf>

- Preliminary Ruling dated April 29, 2010 (Case 114-IP-2009), published in OGCA No. 1860 of August 4, 2010.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace1860.pdf>

- Preliminary Ruling dated June 6, 2012 (Proceeding 19-IP-2012), published in OGCA No. 2097 of September 26, 2012. This case about a similar logo for a perfume and an herbicide.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2097.pdf>

- Preliminary Ruling dated October 24, 2012 (Case 60-IP-2012), published in OGCA No. 2157 of February 27, 2013.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2157.pdf>

- Preliminary Ruling dated November 13, 2012 (Case 116-IP-2012), published in OGCA No. 2161 of March 08, 2013.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2161.pdf>

- Preliminary Ruling dated April 30, 2014 (Case 15-IP-2014), published in OGCA No. 2355 of June 30, 2014.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GAC E2355.pdf>

- Preliminary Ruling dated November 20, 2014 (Case 121-IP-2014), published in OGCA No. 2427 of December 11, 2014.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2427.pdf>

- Preliminary Ruling dated November 28, 2014 (Case 105-IP-2014), published in OGCA No. 2459 of March 04, 2015.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GAC E2459.pdf>

- Preliminary Ruling dated February 17, 2017 (Case 575-IP-2015), published in OGCA No. 2968 of March 15, 2017.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2968.pdf>

- Preliminary Ruling dated February 17, 2017 (Case 669-IP-2015), published in OGCA No. 2969 of March 16, 2017.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2969.pdf>

- Preliminary Ruling dated 04 May 2017 (Case 272-IP-2016), published in OGCA No. 3722 of 08 August 2019.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203722.pdf>

- Preliminary Ruling dated May 06, 2022 (Case 426-IP-2019), published in OGCA No. 4487 of June 02, 2022.

Available at:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204487.pdf>

Books, journals and websites

- Alter, Karen; Helfer, Laurence, *Transplanting International Courts: The Law and Politics of the*

Andean Tribunal de Justice, Oxford University Press, Oxford, 2017.

- Alter, Karen; Helfer, Laurence; Madsen, Mikael Rask, *International Court Authority*, Oxford University Press, Oxford, Oxford, 2018.
- Alter, Karen; Hooghe, Liesbet, *Regional Dispute Settlement*, in: Tanja Börzel, Thomas Risse (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Regionalism*, Oxford University Press, Oxford, 2016, pp. 538-558.
- Bernardin, Daniele de, *EU infringement procedures: July 2020 update*, in: *European Data Journalism Network*, July 22, 2020.
Available at:
<https://www.europeandatajournalism.eu/eng/News/Data-news/EU-infringement-procedures-July-2020-update>
(Accessed: March 25, 2022).
- Cocker, Jonathan; Maduekwe, Nkiruka, *Is the East African Community a Model for Plastics Pollution Strategy?*, in: *Environmental Law Insights*, August 17, 2020.
Available at:
<https://www.environmentlawinsights.com/2020/08/17/is-the-east-african-community-a-model-for-plastics-pollution-strategy/> (Accessed: March 25, 2022).
- Directorate-General for the Environment, *Legal Enforcement Statistics on Environmental Infringements - Article 260 (previously 228) Cases*, 2021.
Available at:
<https://ec.europa.eu/environment/legal/law/statistics.htm>
(Accessed: March 25, 2022)
- Figueroa Hernández, Ariadna; Hernández Benítez, Yendry, *Los Derechos de Propiedad Intelectual y el Medioambiente: Las Negociaciones sobre el Cambio*

Climático, in: *Revista la Propiedad Inmaterial*, 28, 2019, pp. 43-72.

- Gómez Apac, Hugo R.; Solines Moreno, Daniel; Rodríguez Noblejas, Karla, *Desafíos de la propiedad intelectual en el marco del proceso de integración andina*, first edition, Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual - AEPI, Quito, 2019.
- Jacobs, Francis, *The Role of the European Court of Justice in the Protection of the Environment*, in: *Journal of Environmental Law*, 18 (2), pp. 185-205.
- Jiménez, *Papel de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Decisiones Judiciales de los Países Miembros*, in: *Revista Colombiana de Derecho Internacional*, 23, 2013, pp. 87-118.
- Ministry of Environment of Peru, *Diálogos Ambientales con la Prensa - Minería Ilegal*, 2013.
Available at:
<https://www.minam.gob.pe/prensa/dialogos-ambientales/dialogos-ambientales-mineria-ilegal-y-mineria-informal/> (Accessed: June 08, 2022).
- Molano-Cruz, Giovanni; Kingah, Stephen, *Addressing Human Rights in the Court de Justice de the Andean Community and the Tribunal de the Southern African Development Community*, in: *Colombia Internacional*, 81, 2014, pp. 99-127.
- Ponce de León, Eugenia, *Temas de Derecho Comunitario Ambiental Andino*, Universidad Externado de Colombia, Bogota, 2001.
- Rueda Camberos, Flaminio; Arboleda Girón, Walter; Gutiérrez Pérez, Norton, *La calidad del agua de los acueductos de las áreas urbanas del departamento del*

Meta, in: *Investigaciones Andina*, 19 (35), 2017, pp. 11-30.

- Scholtz, Werner; Verschuuren, Jonathan, *Regional Environmental Law - Transregional Comparative Lessons in Pursuit of Sustainable Development*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2015.
- Sotalín, Karina, *Cancilleres de la CAN acuerdan crear Comité enfocado en pueblos indígenas*, in: *El Comercio*, March 26, 2022.
Available at:
<https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/cancilleres-can-comite-pueblos-indigenas-paises.html>
(Accessed: June 08, 2022).
- Tafur Dominguez, Victor, *International Environmental Harmonization - Emergence and Development of the Andean Community*, in: *Pace International Law Review*, 12(2), 2000, pp. 283-318.
- Vargas Mendoza, Marcelo, *El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Defensa de los Derechos Humanos*, in: Claudia Escobar García (ed.), *Teoría y práctica de la justicia constitucional*, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Quito, Quito, 2010, pp. 469-502.
- Verschuuren, Jonathan, *Contribution of the case law of the European Court of Human Rights to sustainable development in Europe*, in: Werner Scholtz and Jonathan Verschuuren (eds.), *Regional Environmental Law - Transregional Comparative Lessons in Pursuit of Sustainable Development*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2015, pp. 363-385.
- Villamizar, Miguel Antonio, *The Andean Court of Justice*, in: Robert Howse, Hélène Ruiz-Fabri, Geir Ulfstein, Michelle Zang (eds.), *The legitimacy of*

Environmental Protection in the Andean Community
international trade courts and tribunals, Cambridge
University Press, Cambridge, 2018, pp. 255-285.

7. Declaration of Competing Interests

The author has no competing interests to declare.

8. Acknowledgements

With these lines, I would like to express my sincere gratitude to Judges Hugo Ramiro Gómez Apac and Gustavo García Brito of the Andean Tribunal, the Secretary General of the Tribunal, Luis Felipe Aguilar Feijoó, and Karla Margot Rodríguez Noblejas, for their support in this investigation. I also extend my thanks to my supervisor, Prof. Silja Vöneky of the University of Freiburg in Germany and the German Environmental Foundation (*Deutsche Bundesstiftung Umwelt*) for their generous financing of my research. I also thank Carlos Garcés for reviewing the Spanish translation of the original document written in English.

This research is part of my larger thesis project in process ('Environmental Litigation before Regional International Courts in Africa and Latin America').



SOBRE LA AUTORA

Sonja Kahl es estudiante de doctorado (PhD) en Derecho Ambiental Internacional de la Universidad de Friburgo (Alemania). Su investigación se centra en el litigio ambiental ante los tribunales internacionales regionales en África y América Latina, y es financiada por una beca de la Fundación Federal Alemana para el Medio Ambiente. En el marco de dicha investigación, ha efectuado estancias académicas en la Corte Centroamericana de Justicia, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte de Justicia del Caribe.

Ha estudiado Derecho en Berlín, Ginebra y Moscú y es especialista en Derecho Internacional. Adquirió su licenciatura como abogada en la Corte Distrital de Brandenburgo en 2019. Además ha adquirido experiencia laboral en la Secretaría del Convenio de Aarhus de las Naciones Unidas (UNECE), la Comisión Europea, el Ministerio Federal Alemán de Relaciones Exteriores y el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, entre otros.



ISBN: 978-9942-7053-0-3



9 789942 705303

